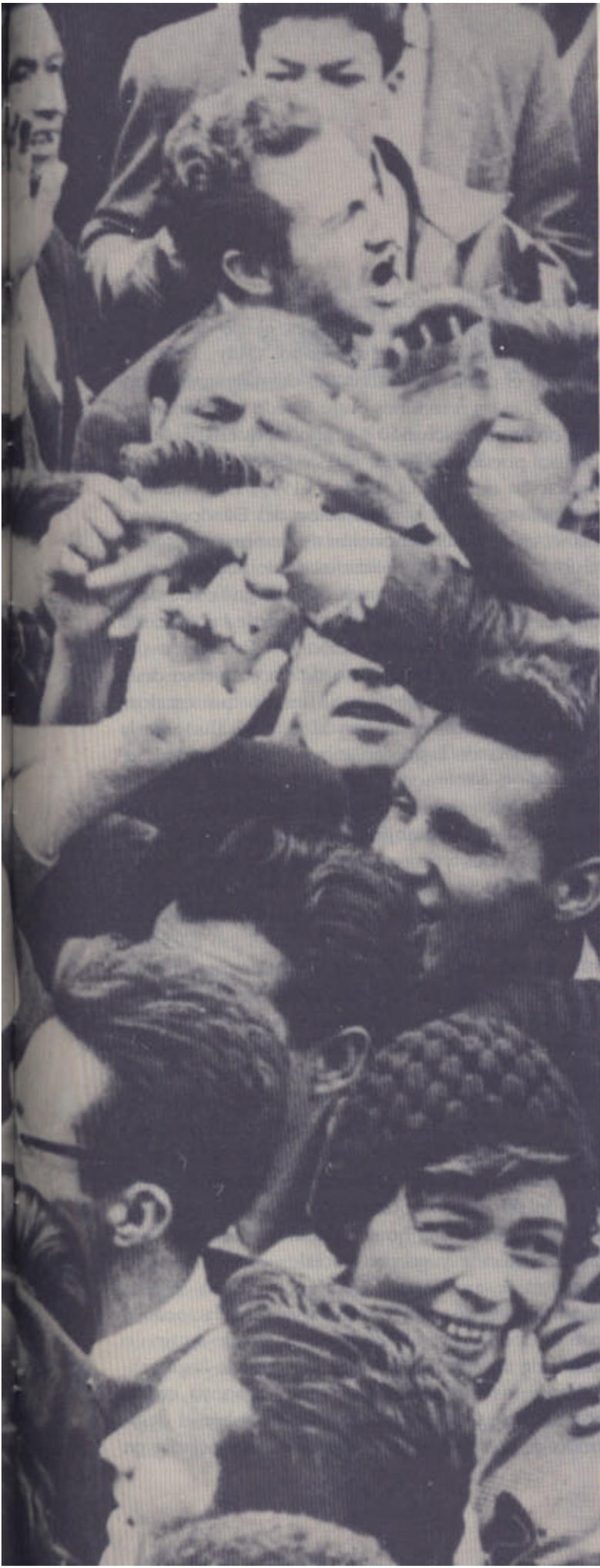


HISTORIA Y SOCIEDAD





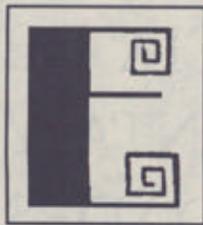


LA VIOLENCIA DE LOS CINCUENTA Y LAS MODALIDADES DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL

INGRID J. BOLIVAR.¹

1 Polítoóloga e Historiadora, Investigadora de CINEP y profesora de la Universidad de Los Andes. Este artículo es una versión resumida de los capítulos 1 y 3 de la monografía de grado para optar por el título de historiadora. La monografía fue realizada en el primer semestre del año 2001, bajo la dirección de Fernán González y se titula "Violencia Política y formación del Estado: Ensayo historiográfico sobre el desarrollo de la violencia de los 50's en Colombia."

INTRODUCCIÓN



El objetivo de este artículo es contribuir a la historiografía de uno de los fenómenos más importantes de la historia moderna de Colombia: la Violencia de los años 50 del siglo XX. Se trata de realizar una mirada de conjunto sobre las investigaciones regiona-

les de la Violencia a partir de la pregunta por la configuración regional del Estado. No se pretende realizar un análisis de todos los elementos, factores y fuerzas sociales implicadas en el desarrollo de la Violencia, sino contribuir a la construcción de una lectura de conjunto sobre la evolución de la misma. Daniel Pecaú ha señalado la carencia de visiones generales sobre la evolución de la violencia, aún cuando se han desarrollado de forma importante las investigaciones regionales (2000). Según el mismo autor, la falta de visiones articuladoras de las distintas dinámicas de violencia se sustenta en, al tiempo que afianza la, dificultad social de elaborar colectivamente tales fenómenos y de convertirlos en experiencia compartida (2000).

El interés por adelantar una lectura sistemática de los estudios regionales sobre la evolución de la violencia de los cincuenta parte de la perplejidad producida por el conocimiento tardío (de la autora, claro está) sobre algunos trabajos de la llamada sociología histórica. A diferencia de lo usualmente creído en la ciencia política y otras ciencias sociales, estos trabajos muestran que el Estado moderno es el resultado de la preparación para la guerra, más que de los esfuerzos para apaciguarla (Tilly, 1992; Elias, 1986; Bolívar, 1999). Desde esta perspectiva, la violencia no es tanto la muestra de la debilidad del Estado, como el indicio de que ciertos procesos de integración territorial y social característicos del Estado se encuentran en marcha. Se parte de que el Estado no es una entidad monolítica ni homogénea. El Estado nación es una forma específica de la sociedad en la que los grupos sociales y los territorios se han integrado en un espacio compartido y delimitado.

Tal integración puede ser producida o alentada de distintas maneras, entre las cuales, el uso de la coerción tiene un estatus privilegiado. (Tilly, 1992) De ahí que el punto de partida del documento sea, primero, que las relaciones entre Estado y violencia no son de mutua exclusión y segundo, que la violencia política puede evidenciar rutas específicas de la configuración del Estado (Bolívar, 1999). El análisis de esto último, de la configuración del Estado colombiano, exige la diferenciación de tiempos, territorios, grupos sociales y modalidades de dominio.

El artículo se pregunta por el significado de la diferenciación regional y temporal de la Violencia en la particular configuración del Estado en Colombia. Esta pregunta parte de un consenso de la historiografía colombiana, al tiempo que recalcan una ausencia. El consenso al que se alude es la importancia de la dimensión regional en el desarrollo de la Violencia, y en términos más amplios, en la política colombiana. La ausencia es la falta de una mirada de conjunto sobre las diferenciaciones regionales y ante todo, sobre la forma como tales diferenciaciones exigen una reconceptualización del Estado y de su configuración particular en el caso colombiano.

El artículo muestra que se obtiene una mayor comprensión de las diferenciaciones regionales de la Violencia cuando se parte de que el Estado no es un actor implantado de manera homogénea en los distintos territorios, que su regulación no cubre por igual a los distintos grupos sociales y que se encuentra y relaciona con distintos tipos de poderes locales. En otras palabras, la comprensión de las diferenciaciones regionales de la violencia aumenta cuando se recuerda que la construcción del Estado es un proceso en el que se deben diferenciar tiempos, territorios y grupos sociales específicos. Así pues, el desarrollo de la violencia de los 50, sus modalidades, lógicas y actores, están relacionados con el tipo de presencia del Estado y de su tipo o grado de articulación con los poderes de las localidades y las regiones. El artículo se apoya en un conjunto de monografías regionales sobre el desarrollo de la Violencia y que están referenciadas en



TIPO DE VIOLENCIA Y TIPO DE SOCIEDAD REGIONAL

La violencia no es un fenómeno homogéneo, sino que expresa distintas modalidades de articulación territorial y social entre Estado y sociedad. Interesa analizar las relaciones entre los tipos de violencia y los tipos específicos de sociedad regional, pues se considera que las claves explicativas para el desarrollo concreto de la violencia yacen, de manera fundamental, en la configuración histórica de las regiones. Tal configuración no es resultado solamente de procesos naturales o geográficos, sino que incluye la producción social de sujetos políticos, la construcción de poder local, las relaciones partidistas y más puntualmente, el tipo de relación de las regiones con la sociedad y el Estado nacional. En efecto, el tipo de violencia que caracteriza una región refleja un proceso gradual y selectivo de construcción del Estado.

El texto acoge parte de las distinciones introducidas por Mary Roldán para el estudio de la Violencia en Antioquia. Esta autora diferencia dos tipos de regiones y dos modalidades de violencia que les son características. Más adelante se revisan con detalle tales distinciones, por ahora basta señalar que se acoge la diferenciación introducida por Roldán entre municipios centralmente integrados y zonas de frontera. Desde esta distinción y desde la referencia a las modalidades de violencia que las caracterizan, o sea, violencia burocrática y otra que no se limita a lo partidista, respectivamente, el capítulo propone una regionalización de la violencia atenuando a las modalidades de integración territorial y social de las diversas regiones.

Se parte de que en el análisis de la configuración del Estado deben distinguirse tiempos, espacios, grupos sociales y modalidades de dominio (Bolívar 2001). A partir de estos criterios el artículo

caracteriza 4 tipos específicos de sociedad regional donde la violencia tiene unas características específicas y en las que la respuesta del Estado también va a ser diferenciable. Los cuatro tipos de sociedad regional identificados en la revisión de las investigaciones regionales son:

Un primer tipo de sociedad regional corresponde a las zonas que Roldán denomina centralmente integradas. Son regiones de asentamiento tradicional, no necesariamente colonial pero donde la regulación social ha logrado afinarse en torno a instituciones sociales más o menos fuertes. En estas regiones los partidos políticos cuentan con una gran capacidad para darle forma a los conflictos locales y a la sociedad regional, al tiempo que refuerzan y son reforzados por los tipos vigentes de jerarquización social. En estas zonas la violencia comprometió o enfrentó unas redes de poder contra otras. Se trató del enfrentamiento entre grupos locales de poder por el control de las estructuras de poder local. Esta violencia que Roldán denomina burocrática y que, a pesar de su gran intensidad, se mantuvo bajo los cánones partidistas, es la violencia que caracteriza los municipios cafeteros de Antioquia. No hay análisis regionales de la violencia en Boyacá y Santander, pero se sabe que en estos departamentos este tipo de violencia azotó los municipios minifundistas y enfrentó grupos de poder local y unas veredas contra otras. Se sabe también que la violencia en esas regiones no se desplazó hacia objetivos radicales, por lo cual puede decirse que por lo menos algunos municipios de esos departamentos también se ubican en esta tipificación regional. Para hacer frente a la violencia burocrática, el Estado confió en las élites y en las instituciones de control tradicional.

Un segundo tipo de sociedad regional está constituido por aquellas zonas de integración subordinada, mediada por la producción cafetera y la colonización antioqueña. Se trata de regiones de creciente importancia en el mapa político y económico del país, pero también de regiones cuya inserción a la vida política nacional ha estado subordinada al desarrollo de la economía agroexportadora o



al predominio de un proceso de colonización específico: la colonización antioqueña. Se trata pues de las zonas cafeteras propias de la colonización "paisa", el departamento de Caldas y especialmente la región de Quindío, el norte del Tolima y el norte del Valle. Son zonas en crecimiento, zonas de reciente y próspera articulación con la economía del café. Pero también son zonas donde las instancias de control y regulación social no son suficientemente articuladas por la estructura partidista. Se trata de regiones en donde la filiación liberal conservador cuenta con gran preeminencia pero no estructura los conflictos sociales de la misma manera que en el tipo regional anterior. La filiación partidista es central en estas sociedades pero, por un lado es una filiación subordinada en el orden

nacional y por el otro es contestada y-o neutralizada con las iniciativas individuales que en ocasiones ponen en entredicho la regulación partidista.

En otras palabras, los liberales y conservadores de estas regiones son liberales y conservadores subordinados en el juego político nacional a los liberales y conservadores de zonas centrales. Pero, además, la filiación liberal y conservadora en el seno mismo de la sociedad regional es mucho más fluida de lo que usualmente se supone, porque se trata de sociedades que conservan cierto carácter de sociedades de frontera, aún cuando se trate de pujantes centros urbanos. Una de las modalidades de violencia más fuerte en estas regiones fue el bandolerismo. Varios autores han constatado que el bandolerismo en cualquiera de sus formas no constituye un residuo de la violencia, sino una de sus manifestaciones más características y masivas. Esto, aún cuando deba distinguirse también entre tipo de bandolerismo y preeminencia subregional. Frente a la violencia en estas regiones, el Estado combinó el uso del Ejército con el apoyo a sectores partidistas afines.

Un tercer tipo de sociedad regional corresponde a las sociedades cafeteras del oriente colombiano, esto es municipios del occidente de Cundinamarca y, sur y oriente del Tolima. Como en el caso anterior, se trata de sociedades cuya articulación con la política nacional en la época de la violencia, pasa de manera preponderante por el cultivo de café. Pero, en contraste con las zonas cafeteras vinculadas a la colonización paisa, estas regiones no se encuentran en crecimiento, sino por el contrario en un acelerado proceso de decadencia. Antes de la violencia, estas regiones, con excepción parcial del sur del Tolima, fueron escenario de importantes conflictos agrarios que revelaron la radicalización política de la zona, ya en la década del 30 y bajo las banderas de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR, el Partido Agrario Nacional, PAN y otros movimientos. Esto, a pesar de que se trata de regiones de un poblamiento mucho más tradicional que las del caso anterior y de zonas donde la fortaleza de la hacienda haría esperar que fueran los partidos políticos tradicionales los que enmarcaran

los conflictos de la sociedad regional. Estas zonas cafeteras en decadencia venían siendo reemplazadas en la producción de café desde comienzos de los años 20 por municipios del departamento de Caldas. Más exactamente en los años 30 es claro que la principal producción cafetera corresponde a las zonas centro-occidentales, esto es las zonas de colonización antioqueña. En estas zonas cafeteras en decadencia, en el oriente del Tolima y en Cundinamarca, la modalidad de violencia política más importante implicó la lucha de guerrillas liberales y posteriormente la estigmatización de algunos municipios como comunistas. Frente a la violencia de estas regiones, el Estado respondió acudiendo al ejército e incluso convirtiendo algunos de estos municipios en zonas estigmatizadas por la presencia comunista.

Un cuarto tipo de sociedad regional afectada por la violencia, pero bajo la modalidad específica de lucha entre guerrillas, corresponde a las zonas periféricas y de frontera. Los distintos extremos de Antioquia, tanto como las zonas del Magdalena Medio y los Llanos orientales sufren una violencia que aún cuando asume los ribetes partidistas recubre con ellos problemas de tierra y trabajo. En estas regiones la violencia comenzó invocando la retórica partidista, pero pronto desbordó sus antiguos márgenes para incluir desafíos a la dominación bipartidista en sí misma. Como en los casos anteriores, se enfrentan contrachusmas y guerrillas liberales, al tiempo que la respuesta del Estado da preeminencia al papel del ejército en el control de la violencia. En algunas de estas regiones, la guerrilla liberal va a evolucionar hacia formas de resistencia no partidista o comunista.

Para construir esta tipificación de las sociedades regionales se han retomado los planteamientos de distintos autores. Especialmente útiles han sido los planteamientos de Mary Roldán, quien, al tiempo que distingue entre varias subregiones de Antioquia, caracteriza las modalidades de violencia y la respuesta del Estado. Ahora bien, una gran dificultad que se ha enfrentado en la construcción de esta tipificación regional es la carencia de estudios so-

bre la violencia en Boyacá, Santander y Norte de Santander. Los distintos autores coinciden en afirmar que la primera fase de la violencia, 1946-1949 fue especialmente crítica en estos departamentos, en la medida en que ellos habían sufrido los rigores de la homogenización liberal en la década de 1930. Sin embargo, no se identificó ningún estudio de un investigador social sobre estas zonas. Existe sí una literatura testimonial o de opinión, pero en la medida en que el artículo se ocupa de la producción historiográfica de historiadores y científicos sociales, tal literatura no fue incluida. La ausencia de la información sobre estas zonas es un problema de gran importancia. El análisis de la diferenciación regional de la violencia se sitúa de manera preponderante en las áreas cafeteras que, si bien sufrieron el rigor de la violencia, no fueron las únicas.

En este punto resultan pertinentes unos señalamientos de Paul Oquist con respecto a la violencia en algunos municipios de Boyacá y Santander. Más exactamente sobre aquellos que se sitúan en "la gran franja de municipios minifundistas que empieza en el norte de Cundinamarca y continúa en el occidente de Boyacá a través de Chiquinquirá hasta la provincia de Vélez en el departamento de Santander". Tales municipios fueron muy afectados por la violencia y, sin embargo, no han sido objeto de una investigación detallada al estilo de los estudios sobre Quindío, Antioquia o Tolima. Frente a tal situación, dice Oquist que "desde el punto de vista de las autoridades nacionales, las luchas de los minifundistas por la estructura del poder local no tuvieron prioridad. Los pequeños agricultores fueron menospreciados como partidarios fanáticos y las tropas no fueron enviadas a estas zonas en gran número, sino asignadas a las áreas de guerrillas y a las de importancia económica y política" (Oquist, 1978: 299).

Para los intereses del artículo resulta de importancia el señalamiento de Oquist pues identifica los tres factores que aquí se quieren vincular: tipo de sociedad regional y de articulación con la política nacional, modalidad de la violencia y respuesta del Estado. Según Oquist los municipios minifundistas del centro oriente no son de gran importancia eco-

nómica y política. Su violencia es leída por las autoridades y habría que decir que también por la historiografía, como expresión de un fanatismo político. A su vez, la insistencia en tal fanatismo sustenta la respuesta del Estado: abandono o confianza en que las autoridades locales y las élites políticas pueden reestablecer el control sin apoyo del nivel nacional y sin necesidad de recurrir al ejército. También es importante señalar que si en otras regiones, el bandolerismo o la lucha de guerrillas revelan hasta qué punto existe un distanciamiento entre formas de control social local y estructura partidista, el fanatismo político expresa la centralidad de los partidos en la definición de la identidad local y de sus conflictos. En otras palabras, lo que está en juego en esas distintas modalidades de violencia es la diferenciación de la sociedad regional. Tal diferenciación tiene un componente fundamental en la forma como los partidos políticos intervienen en las regiones y en la producción social de identidades. La diferenciación regional es también la diferenciación de las formas de inserción de los partidos políticos en las sociedades locales y de su capacidad para articularse con otras formas de jerarquización y conflicto social.

En algunas de las secciones que siguen se trabaja a partir de esta tipificación regional. En otras secciones se interroga esta tipificación desde problemas puntuales que constituyen objeto de discusión historiográfica, pero sobre todo indicio de distintas modalidades de integración territorial y social. El problema central es que las modalidades de violencia expresan tipos diferenciados de integración territorial y social; en las que, al mismo tiempo, se sustenta la respuesta del Estado. Antes de seguir conviene recordar que la insistencia en modalidades de violencia y tipos de integración territorial y social, obedece a que el proceso de formación del Estado no cubre por igual, ni en el mismo tiempo, los distintos territorios y grupos sociales.

El interés por diferenciar la manera en que el Estado hizo frente a las distintas modalidades de violencia en las regiones aparece ya en el texto de Oquist. En el capítulo titulado "regionalización es-

tructural de la violencia", Oquist distingue entre varias situaciones de conflicto, al tiempo que se pregunta por la manera cómo el Estado responde ante esas diversas situaciones y su capacidad efectiva de recuperar el control. En lo que sigue se retoman algunos de sus planteamientos



LO REGIONAL DE LA VIOLENCIA: EL CASO DE ANTIOQUIA

Paul Oquist resaltó la necesidad de estudiar la violencia a partir de una regionalización estructural. Algunos autores se han hecho cargo de tal regionalización, comparando las dinámicas de violencia en distintas subregiones de los departamentos más importantes. Uno de los estudios que llega más lejos en este propósito es el de Mary Roldán sobre la violencia en Antioquia. La autora insiste en que las condiciones locales explican más el desarrollo de la violencia y su naturaleza que las disputas ideológicas en Bogotá. No se trata de que la política que se hace en Bogotá no tenga importancia en las regiones, sino que esa misma política puede ser neutralizada y mediada por las condiciones de la política local. Al igual que Oquist, Henderson y Ortiz, Roldán insiste en que son las condiciones de política local las que articulan el desarrollo temporal y regional de la violencia. Todos estos señalamientos se desprenden del estudio que ella hace de la violencia en Antioquia, un departamento que provee un importante punto de contraste con las otras regiones donde la violencia fue severa. En este departamento se combinan tanto la economía tradicional productora de café, como las fronteras ganaderas inestables, rebeldes, que en los Llanos dieron lugar a los grupos de guerrilla. (Roldán, 1998: 58)

De ahí que la autora insista en la necesidad de diferenciar el tipo de violencia, de sociedad local y de respuesta estatal que se produce en dos sub-regiones del departamento. Una, aquellas zonas del sur y suroeste típicamente cafeteras y otras,

las distintas zonas de periferia por los costados del departamento.

Los municipios cafeteros de Antioquia están muy integrados a la hegemonía económica y política en el departamento. En ellos la violencia se mantiene controlada y encauzada por la vía partidista. La autora habla aquí de violencia burocrática y no sólo partidista porque en ella se enfrentaban también miembros del mismo partido. Por esta vía la autora insiste en que el análisis de la violencia debe enfatizar el carácter no homogéneo ni monolítico de los partidos, así como sus importantes fisuras internas y la lucha faccional.

La otra subregión destacada por Roldán incluye las diversas zonas de frontera del departamento. Antioquia es caracterizado por Roldán como un departamento disperso y dividido, en que la accidentada topografía servía de sustento a la proliferación de sociedades subregionales diferenciadas. En este sentido, la autora destaca la existencia de fronteras y periferias por los distintos costados del departamento, siendo las más destacadas las fronteras de la zona nororiental y de los municipios antioqueños de la ribera del Río Magdalena. En esas zonas de frontera, la violencia, aunque también invocó la retórica bipartidista, implicó la redefinición de conflictos de tierras, de trabajo e incluso problemas sociorraciales. La violencia no se quedó en los márgenes partidistas sino que incluyó conflictos sociales de gran centralidad en las periferias, al tiempo que alentó la radicalización política de los pobladores.

Roldán distingue entonces entre unos municipios cafeteros, centralmente integrados y estables, donde la violencia no tuvo una gran magnitud y donde pudo encauzarse por la vía partidista, y unos municipios de frontera, no integrados don-

de la filiación partidista es desbordada por otras filiaciones y conflictos como el del enfrentamiento por el uso de la tierra y las relaciones entre trabajo y capital.²

La respuesta del Estado a estos distintos tipos de violencia también va a ser diferenciable. Mientras confía en la capacidad de las élites locales cafeteras o en la mediación de otras agencias como la iglesia católica para resolver los conflictos en los municipios integrados, recurre a la militarización de las regiones de frontera. Dicho de otra manera, el Estado confía en que el dominio indirecto en las zonas integradas permitirá una "vuelta a la normalidad"; mientras que pretende el control directo de las fronteras mediante la presencia militar. Lo que está en juego entonces es la relación entre violencia y diferente tipo de presencia del Estado. Como se ha dicho en otras ocasiones, la violencia no puede desprenderse de la ausencia de Estado, porque esto implicaría desconocer las formas de regulación y control social que anteceden y en ocasiones contradicen la dominación estatal. La pregunta sigue siendo por las condiciones que permiten el auge de la violencia aún en las zonas donde el Estado nunca había intervenido directamente. En otras palabras, por qué las otras formas de regulación y control social regional no pueden contener la violencia. La generalización de la violencia en algunas regiones y la debilidad de las antiguas formas de cohesión y control social deben situarse en el contexto de una creciente radicalización política nacional, en la que la sociedad y lo social fueron cada vez más percibidos y producidos como violencia (Pecaut, 1987)

Así mismo es relevante la constatación que hace Roldán en torno al carácter particular de la violencia en cada una de esas zonas. Roldán muestra que la

2 Las zonas integradas o de poblamiento tradicional eran las áreas limitadas al norte por Yarumal y Santa Rosa; en el este por La Unión y El Retiro, en el noreste por Santo Domingo; en el sur por Abejorral y Sonsón, en el suroeste por los municipios cafeteros entre Andes y Salgar, Bolívar y Betulia. Los pueblos de la periferia eran pueblos como Zaragoza, Remedios, Cocorná, Puerto Triunfo, Puerto Berrio, Ituango, el eje bananero, etc... "podemos definir ampliamente la frontera como el área comprendida por el Valle del Bajo Cauca, las tierras bajas de pastoreo que lindan con el Magdalena Medio, el alto Sinú a lo largo de los límites del departamento de Bolívar, la esquina extrema del oeste de Antioquia (incluyendo la sección más al norte de Urrao). (Roldán, 1992: 331-332)

violencia en los municipios integrados era electoral o burocrática pues lo que comprometía era el acceso a los puestos públicos. La violencia en esos municipios no puso en juego el status quo y se movió entre los conflictos propios del reemplazo de una red de dominio indirecto por otra. En otro capítulo se examina con cierto detenimiento el contexto de centralización política en el que se produce este reemplazo de una red por otra.

Por ahora, es necesario retener que en los municipios integrados, ya por la acción de los partidos políticos, la iglesia católica y-o las organizaciones responsables del cultivo y la exportación del café, la lucha política se jugaba en el enfrentamiento entre las distintas redes de poder local características de un Estado de dominación indirecta. Esa lucha política sólo se volvió violenta cuando en un contexto de creciente centralización, los rivales políticos, aún dentro del mismo partido, resultaron fortalecidos y se alteró el balance de poder. Es necesario resaltar este punto. La violencia burocrática característica del primer período de la Violencia y de las zonas integradas enfrenta a una red de poder contra otra, aún dentro del mismo partido político. Tal enfrentamiento sólo se tornó violento cuando coincidió con un contexto de creciente centralización y radicalización política, así como de transformación de las jerarquías partidistas incluso en el nivel nacional. En el siguiente capítulo dedicado a las relaciones entre centralización política y filiación partidista se examina quiénes intervienen en la violencia burocrática y por qué. Por ahora interesa retener que la violencia que enfrenta una red de poder con otra pone de manifiesto la lucha faccional al interior de los partidos políticos.

Además de los dos focos básicos de violencia y de las dos modalidades de la misma, Roldán caracteriza distintas evoluciones temporales de la violencia en el departamento. Entre 1946 y 1949 la violencia azotó principalmente a los municipios integrados y se caracterizó por disputas electorales, manifestaciones y choques contra las autoridades locales y regionales y conflictos sobre prerrogativas y clientelismo. En esta primera fase un nuevo sector de políticos

profesionales, cuyo reconocimiento se deriva de la radicalización política, va a expandir sus redes políticas. En la segunda fase, que se extiende desde la elección de Laureano Gómez hasta el golpe de Rojas Pinilla (1949-1953), algunas batallas electorales y civiles se transformaron en confrontaciones armadas entre guerrillas liberales y autoridades conservadoras o entre guerrillas liberales y grupos armados civiles conservadores conocidas como *contrachusmas*. Además, en esta segunda fase la violencia se desplaza de los móviles netamente partidistas hacia otros asuntos conflictivos de la sociedad regional: tierra y trabajo entre otros (Roldán, 1992: 335).

Ahora bien, ante el riesgo de sobresimplificar la evolución de la violencia al discriminarla geográfica y temporalmente, Roldán recuerda que tanto en las historias de los municipios integrados como en las historias de los municipios de frontera el punto identificado como inicio de la violencia en Antioquia es 1949. La autora comenta estos hallazgos señalando que precisamente, la percepción extendida entre los pobladores antioqueños, de que la violencia de 1946-1949 era normal, propia de los ajustes políticos tras el cambio de hegemonía, desnuda los nexos entre política y violencia en la historia colombiana.

Ahora bien, en las zonas de frontera la violencia no pudo ser controlada porque las instituciones y los grupos sobre los cuales "se había apoyado históricamente la élite de la región para llenar los vacíos de un Estado ausente —la Iglesia católica, las élites, las pequeñas familias propietarias que reproducían los valores burgueses —estaban también ausentes de esas áreas" (Roldán, 1992: 54) Roldán señala que los colonizadores antioqueños solo se extendieron hacia las periferias del noroeste y del oeste cuando los avances en la comunicación y el transporte hicieron posible la concentración y explotación de la tierra en grandes propiedades agrícolas y de ganado. Tal situación tuvo lugar a comienzos del siglo XX y deja ver que desde el proceso mismo de colonización estas zonas tenían un lugar subordinado en la geografía antioqueña. Se trataba de economías extractivas y no de pequeñas

y democráticas propiedades como suele insistirse en la caracterización de la Antioquia cafetera.

Siguiendo la formulación de Roldán, la violencia en los municipios de frontera es distinta a la violencia de los municipios integrados. Estos últimos están integrados por la vía de los partidos, la iglesia, las élites, el modelo familiar, entre otros. En la frontera no funcionan esas distintas instituciones que aseguraban la integración. Aunque en la violencia de los municipios no integrados se habla en términos de la retórica bipartidista, los conflictos no son por el control burocrático del incipiente Estado local, sino por la redefinición del uso de la tierra y de las relaciones entre capital y trabajo. De ahí que en los municipios de frontera la violencia política haya sido protagonizada por contrachusmas conservadoras y guerrillas liberales. El rótulo partidista de los actores en conflicto no debe ocultar el hecho de que "la lucha por defender al partido se convirtió en una lucha por el monopolio del acceso al trabajo. Dos premios yacían en el corazón de la lucha nominalmente partidista, el empleo en el ferrocarril, las minas y los equipos de carreteras y en las recientemente abiertas propiedades ganaderas y agrocomerciales en el nororiente. A medida que la violencia se expandía, los liberales y conservadores operaban como paramilitares partidistas y agentes laborales informales." (Roldán, 1992: 493).

En los municipios de frontera la violencia mezclaba objetivos partidistas y económicos que no se restringían al control del Estado. Roldán reseña las amenazas a la propiedad territorial, las purgas políticas en los sindicatos y en el enrolamiento de trabajadores para las obras públicas y muestra cómo esas mismas razones fueron distanciando a las contrachusmas y a las guerrillas de sus respectivos patrocinadores partidistas. La violencia en la zona de frontera de Antioquia pudo alimentarse de la proliferación de bandas y devenir violencia económica precisamente porque se trataba de una región donde las jerarquías sociales no estaban suficientemente asentadas y donde los estereotipos regionales y la discriminación sociorracial impedía la consolidación de un dominio indirecto como el que operaba



en las zonas cafeteras. Roldán resalta la confluencia temporal entre colonización de la frontera y violencia en la frontera. En otras palabras, la migración y la concentración de la tierra en las zonas de frontera de Antioquia no fueron resultado de la violencia, sino que operaron como su catalizador. Los giros revolucionarios o por lo menos amenazantes contra los jefes políticos que tomaron algunas de las antiguas contrachusmas y de las guerrillas liberales revela la precariedad del control político sobre la región y la indefinición de jerarquías políticas.

En clara contraposición con los "municipios integrados" donde una red de poder se enfrenta violentamente con otra en un contexto de centralización política creciente, en los municipios de frontera la violencia no es protagonizada por redes de poder que cuenten con el dominio de la población, sino que su propio desarrollo va a presionar la definición de vínculos políticos. Dicho de otra manera, en las zonas de frontera "la autodenominada violencia partidista" permitió la definición de hegemonías, la construcción del poder local que sería la base para el ulterior dominio indirecto del Estado. Además, la violencia participó del afianzamiento de jerarquías sociales incipientes y de la definición de los derechos de propiedad sobre algunos recursos que hasta ahora comenzaban a ser explotados. Lógicamente los distintos sectores sociales ubicados en la región no compiten de la misma manera en el afianzamiento de tales jerarquías.

La creación de contrachusmas por parte de algunos hacendados con intereses en la zona y el apoyo a tal iniciativa por parte de los políticos del sector medio conservador en Medellín, redundarían en el establecimiento de un tipo de dominio indirecto en la región. Dominio que no contaba con la aprobación de los conservadores más establecidos, quienes resultaron excluidos, pero que dio origen a una forma específica de relación entre el centro y la periferia de Antioquia. De ahí que se insista en que la violencia implicó la redefinición de los poderes locales, el desplazamiento de los conservadores más establecidos por los que habían sido excluidos o por los que veían reforzado su poder por las reformas recientes.

La violencia denominada partidista en las zonas de frontera precipitó los esfuerzos del gobierno departamental por controlar la subregión, por fundamentar un tipo de dominio en ella. Sin embargo, por la diversidad de poblaciones allí reunidas, por el tipo de tenencia de la tierra y por la poca participación que en esas zonas tenían las instituciones tradicionales del proyecto antioqueño, el gobierno departamental concedió preeminencia a la opción militar y de fuerza. Se concedió preeminencia a la presencia directa del Estado, mediada por el ejército, en detrimento de la mediación de los partidos políticos tradicionales y las redes locales de poder. En palabras de Roldán, "la presencia permanente y realzada del ejército y las restricciones draconianas aplicadas a la fuerza de trabajo temporal en la región, sentaron el tono para la relación futura entre el centro y la periferia en Antioquia" (Roldán, 1992: 523-524). La desconfianza frente a la población de frontera tenía que ver también con el poco peso que en ella tenían los partidos políticos.

La distinción introducida por Roldán entre unos municipios cafeteros integrados y unas zonas de frontera donde las modalidades de violencia y la respuesta del Estado son claramente diferenciables resulta útil para tratar de comprender las dinámicas de violencia en otras zonas del país. Roldán elabora tal distinción para la violencia en Antioquia y no hace ningún señalamiento sobre las posibilidades

de extender esa distinción a otros casos. Sin embargo, desde los planteamientos de esta autora es pertinente preguntarse por la evolución de la violencia en otras zonas cafeteras. Algunas de estas zonas, como el Quindío, si bien disfrutaban de cierto grado de integración y de articulación con la sociedad nacional, fueron escenario de una violencia que sin amenazar el status quo, tampoco pudo ser controlada por las instituciones tradicionales. En otras palabras, la distinción que hace Roldán entre municipios cafeteros integrados donde la violencia es burocrática y municipios de frontera donde la violencia tiende a independizarse de los cánones partidistas y a incluir otro tipo de conflictos exige repensar las diferenciaciones entre las zonas cafeteras y las modalidades de violencia que en ellas tuvo lugar. En efecto, las zonas cafeteras no son uniformes sino que la estructura y fortaleza de las instituciones centrales en el proyecto de colonización paisa varía de acuerdo a la subregión de que se trate: Caldas, Quindío, norte del Valle o Tolima. Como la formación del Estado, la expansión antioqueña también es diferenciada por etapas y regiones.

Jesús Antonio Bejarano introdujo una distinción entre unas zonas cafeteras donde hay lucha por la tierra (sur del Tolima, norte del Huila, Sumapaz, Viotá) y otras donde la lucha es por la "cosecha cafetera" (Valle, Tolima, Antioquia y Caldas). (Bejarano, 1987: 68). Aunque el autor no desarrolló más allá del enunciado esta diferenciación, hace eco de los planteamientos de Christie en torno al carácter profundamente asimétrico y diferenciado regionalmente de la producción cafetera en Colombia (Christie, 1986: 67).

Ahora bien, distintos autores han insistido en que las formas de producción limitan o a enmarcan las modalidades de violencia que tienen lugar en una u otra zona. Lo importante aquí, para retomar los planteamientos de Roldán, es distinguir la centralidad de esas formas de producción o, puesto de otra manera, el tipo de integración política que esas formas de producción pueden favorecer. La violencia en los municipios cafeteros de Antioquia fue, como se ha dicho siguiendo a Roldán,

una violencia burocrática por el control del poder local. Una violencia que enfrenta distintas facciones partidistas en el contexto de una creciente centralización en el nivel departamental y una aguda rivalidad de los políticos nacionales. En los municipios cafeteros de Antioquia la violencia tuvo poco que ver con la lucha por la tierra y con la lucha por la cosecha cafetera. Eso habla de un tipo específico de sociedad local y sobre todo de un tipo de integración de tales municipios con el departamento y con la política nacional.

Las preguntas que quedan entonces son por los tipos de sociedades locales cafeteras y por su grado de integración a la vida política regional y nacional. En las secciones que siguen se trabajan algunas de esas preguntas desde la diferenciación expuesta al comienzo del capítulo. A continuación, se trabaja la diferenciación de las zonas cafeteras involucradas con la expansión antioqueña: Caldas, Norte del Valle, y norte del Tolima. Las modalidades de violencia y el tipo de sociedad local de las otras zonas cafeteras, oriente y sur del Tolima y occidente de Cundinamarca serán objeto de discusión en la sección dedicada a los conflictos agrarios.



¿POR QUÉ LA ZONA CAFETERA?

Distintos autores han constatado que las regiones más afectadas por la Violencia fueron precisamente las distintas zonas cafeteras. Pecaut, recuerda que "la violencia no nació en las regiones cafeteras, pero sí encontró allí su terreno de elección. Como en otras partes, se inscribe en el enfrentamiento partidista. Más que en otras partes se integra desde el comienzo con elementos litigiosos de orden económico" y tiende a no producir actores colectivos. (Pecaut, 1987: 559).

Por su parte, Gonzalo Sánchez se pregunta explícitamente por las condiciones que permiten que la violencia sea tan fuerte y prolongada en las zonas cafeteras. Según sus planteamientos, "exis-

tían en la zona cafetera dos condiciones ideales – alto grado de movilidad rural y fuerte integración a la ciudad- para que una movilización campesina de tal magnitud se produjese y fuera políticamente controlable" El mismo autor señala que "las zonas cafeteras son los sectores rurales más profundamente ligados a la ciudad y más integrados políticamente a la estructura nacional de poder" (Sánchez, 1985: 243) En una dirección similar se orientan Betancur y García, para quienes, "en el norte del Valle, y sólo allí, se habían dado las causas que facilitarían el surgimiento de las cuadrillas: pequeña y mediana propiedad cafetera, descomposición campesina, estrecha relación campo-ciudad, persistencia de gamonales y caciques y finalmente, ascenso social de sectores medios" (Betancur y García, 1990:147). También Bejarano comparte la idea de que la intensidad de la violencia en la zona cafetera está vinculada con el alto grado de integración al mercado y al poder nacional. Por su parte, en el caso del Tolima, Henderson insinúa que uno de los indicadores de mayor integración a la política nacional es precisamente no poder contrarrestar en la localidad, los enconados enfrentamientos políticos e ideológicos de los líderes nacionales.

Uno de los departamentos cafeteros por excelencia es Caldas, y dentro de él, la zona que hoy constituye el departamento de Quindío. En este departamento, los conflictos agrarios no tuvieron un rol preponderante en la Violencia. Pecaut ha insistido en que tales departamentos (Quindío y Valle) fueron escenario de conflictos más individuales que colectivos. De la violencia en Quindío, dice Pecaut "no se relaciona con la repartición de la tierra, y menos aún, con los derechos de las distintas categorías de trabajadores de las distintas fincas. El control del excedente de la economía del café representa el núcleo fundamental de litigio y por ende, son los comerciantes y en menor medida los transportadores quienes constituyen los principales protagonistas" (Pecaut, 1987: 555).

Si bien es cierto que Quindío no es una zona de conflictos agrarios como el oriente del Tolima, es preciso reseñar, como lo hace el mismo Pecaut,

que aún en la década del 1930 estuvo abierta la colonización, pues todavía en los años veinte quedaban disponibles extensas regiones de tierra pública. (Christie, 1986: 74). En esa misma dirección se orientan los comentarios de Legrand para quien no puede olvidarse que en el departamento cafetero del Quindío, miembros de la élite comercial de Manizales habían establecido desde finales del siglo XIX, grandes ganaderías en los baldíos, a medida que los colonos iban abriendo la región. La autora cita un documento de un observador en los años treinta, según el cual "la concentración de la propiedad territorial y las consiguientes tensiones entre colonos y terratenientes habían configurado en Quindío un problema tan serio como el de Sinú" Además, la misma autora reseña que a comienzos de la década del treinta, centenares de familias de colonos en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya se enfrentaron a los hacendados y a varias medidas de desahucio en su

contra. Tales acciones se expandieron hacia otros municipios, como Pijao y Belalcázar, donde grupos de colonos invadieron algunas haciendas (Legrand, 1986: 160-161).

Al respecto señala Carlos Miguel Ortiz, "el corrimiento de la frontera agrícola, todavía operante en la primera mitad de este siglo, cuando aún se fundaban cafetales y se titulaban baldíos en la zona cordillerana, favoreció la relación entre la movilidad social y la tenencia agraria, y entre el comercio y la inversión en tierras". Los años 40 son caracterizados por el mismo autor, como los años del "estado casi terminal del proceso colonizador" En una dirección similar se orientan los planteamientos de Keith Christie, quien informa que, entre 1930 y 1941, fueron otorgados unos 653 títulos de propiedad de terrenos localizados en el actual departamento de Quindío (Christie, 1986: 74) y con esos títulos se reducía la cantidad de terreno disponible. Es pertinente recordar a esta altura que Ortiz descubre que



la mayor parte de los conflictos llevados a los tribunales antes de 1948 conciernen a disputas sobre la tierra y en esa misma medida "la relación entre propietarios y agregados o colonos no se reducía a su dimensión privada y paternalista, sino que pasaba de alguna manera por la institución estatal" (Ortiz, 1985: 28-29; 47).

Frente a la pregunta por la movilidad social y el escaso radicalismo político de los campesinos del departamento y especialmente los de la zona de Quindío, Christie señala: "Si queremos entender a Caldas, es necesario subrayar que el número de campesinos propietarios se estaba incrementado de manera significativa entre los años 30 y los años 50. La oligarquía coexistía fácilmente con esta masa creciente de propietarios marginales. Más aún este patrón de tenencia facilitaba de gran manera la continuación de una sociedad jerárquica en la medida en que calmaba el hambre de tierra del campesinado durante períodos de depresión e inestabilidad en el ingreso, dirigiendo su atención hacia otros aspectos como el de los precios o el del crédito" (Christie, 1986: 75). Ahora bien, el crecimiento del número de campesinos propietarios que en el planteamiento de Christie puede funcionar en cierta medida como cortapisa a la radicalización política, no se explica solamente por la creciente titulación de baldíos.

El autor muestra que el aumento en número de propiedades también está relacionado con la división de tierras comunales o de resguardo en el área de Riosucio-Anserma y con la disminución del tamaño de la finca promedio. Esta última reducción o subdivisión de las fincas tuvo que ver en el sur del departamento, es decir, en Quindío, con los procedimientos de herencias y sobre todo con la venta de las grandes fincas por razones financieras.⁵ Así pues, aunque el Quindío no es una zona con los conflictos agrarios del oriente del Tolima, lo que Oquist denominó "violencia de la cosecha cafetera"

y lo que Ortiz ha caracterizado como "negocios de la violencia" deben localizarse en esta situación específica en la que se aumenta el número de campesinos propietarios y en la que permanece el carácter de sociedad de frontera.

Aunque no solamente referidas a la situación del Quindío, unos señalamientos de Palacios resultan pertinentes: "las comarcas cafeteras del occidente colombiano, articuladas por centros urbanos dinámicos, se beneficiaron antes y más rápido que las demás regiones rurales de una infraestructura de ferrocarriles, carreteras, electricidad, bancos y escuelas. Pero esta infraestructura moderna estaba corroída por los procesos inacabados de colonización. La vida se desenvolvía como en una sociedad de frontera todavía apegada a los valores supremos del ascenso económico individualista en un contexto de fragilidad de los derechos de propiedad" (Palacios, 1996:232). En la cita se destaca la alusión a los distintos fenómenos de desarrollo "corroídos por un inacabado proceso de colonización". Precisamente, el Quindío era una de las zonas de poblamiento más reciente y al mismo tiempo de mayor dinamismo económico en el conjunto de los territorios de la colonización antioqueña cuando sobrevino la Violencia. (Christie, 1986: 134). Ese poblamiento reciente y el hecho de ser una de las zonas "que parece haber recogido menor proporción de migrantes de la tradicionalmente conservadora Antioquia," (Christie, 1986: 134) define las modalidades de la violencia, tanto como el repertorio puesto en marcha por las entidades del Estado, en sus distintos niveles.

A pesar de tratarse de una importante zona cafetera, el Quindío no puede considerarse como una zona centralmente integrada en los términos de Roldán. En efecto, Christie resalta el hecho de que "pocos miembros de las "buenas familias" aparecían como fundadores de las poblaciones del Quindío establecidas con posterioridad a 1875" y que

⁵ Algunas de las razones financieras que explicaron la subdivisión y venta de fincas fueron el aumento del valor catastral de todas las propiedades rurales y el aumento mismo en el valor de la tierra. (Christie, 1986: 81)

incluso los funcionarios públicos locales en esta zona del departamento de Caldas, pocas veces pertenecen a las familias registradas en las genealogías de "las buenas familias" estudiadas por él. (Christie, 1986:41) Sin embargo, esto no significa que el Quindío haya sido una zona abandonada a su propio dinamismo. El mismo Christie recuerda que, "a pesar del origen relativamente humilde de los fundadores, la presencia directa de la oligarquía regional se hizo sentir en lo económico y en lo política aunque menos agudamente que en Manizales" Para este autor, "la mayor apertura relativa del Quindío es solo una diferencia de grado, nunca un marcado contraste con Manizales" (Christie, 1986: 53).

De ahí que se pueda decir que la zona del Quindío no es "centralmente integrada", pero tampoco una sociedad periférica al estilo de las regiones del Magdalena Medio o el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de una zona integrada de manera subordinada a las hegemonías políticas regionales y a la vida política nacional. La integración subordinada en la política nacional y el carácter estratégico en el desarrollo económico, le confieren a la violencia política que tuvo lugar en el Quindío y en las otras áreas cafeteras por fuera de Antioquia, un sello especial. Sin embargo, es preciso diferenciar la evolución de la violencia en Quindío de la evolución de la violencia en el departamento de Caldas como conjunto. No se cuenta con estudios detallados sobre la violencia en el departamento de Caldas en general, pero se sabe que se venían presentando sangrientos enfrentamientos par-



tidistas desde 1944 en los municipios caldenses de Apía, Belén de Umbría, Salamina y Riosucio. Estos enfrentamientos partidistas recuerdan los señalamientos de Roldán, en torno a la violencia burocrática y evidencian un tipo de integración y articulación política. Pero, a diferencia de lo sucedido en Antioquia, en los municipios caldenses, el reestablecimiento del orden público se puso en manos del ejército, ya desde mediados de los años 40 (Sánchez, 1983b:36). A comienzos de 1948 la violencia en los municipios caldenses pasa del sectarismo político y la agresión verbal a la

acción homicida. Antes del 9 de abril tienen lugar asesinatos de liberales y fuertes afrentas de la policía contra las manifestaciones públicas de liberales contra la violencia en otros departamentos. (Sánchez, 1983: 38). Como en el caso de los municipios integrados de Antioquia, tales acciones hablan de un tipo de articulación política que pasa de manera privilegiada por los partidos políticos. En referencia a lo sucedido el 9 de abril en Caldas, Gonzalo Sánchez dice "los elementos más ostensibles en el curso de los acontecimientos en el Viejo

Caldas serían, ante todo, el sello marcadamente sectario de la protesta, dada la dominación ideológica y política ejercida por la oligarquía caldense tanto a través de los partidos tradicionales como de la poderosa Federación de Cafeteros.." (Sánchez, 1983b: 42).

Sin embargo, puede señalarse cierta diferencia en el desarrollo de la violencia entre los municipios caldenses "tradicionales" y los municipios del actual departamento de Quindío. En estos últimos la

violencia no se restringió a lo que Roldán denomina violencia burocrática, esto es, no enfrentó a las redes de poder en marcos estrechamente partidistas, pero tampoco dio lugar a proyectos políticos alternativos o a grupos de guerrilla más o menos perdurables. Como en el caso de Antioquia, la modalidad de violencia que tuvo lugar en el Quindío es diferenciable según la fase o el período específico de que se trate. Carlos Miguel Ortiz señala que después del 9 de abril y con la creciente radicalización política conservadora en el nivel nacional se fueron incrementando las persecuciones a los liberales, especialmente en los municipios de reconocida trayectoria gaitanista, como Alcalá. En una dirección similar se encuentra Gonzalo Sánchez quien recuerda que, durante el 9 de abril, algunos de los municipios del actual departamento de Quindío, como Calarcá, fueron escenario de importantes manifestaciones. Para este autor, la dinámica política asociada al asesinato de Gaitán, dejó ver las tensiones regionales entre la capital y la provincia, entre Manizales y las otras ciudades del departamento de Caldas (Sánchez, 1983b:40).

Ortiz señala que, desde mediados de 1949 y en el período que antecede a la elección de Laureano Gómez como Presidente, se empezó a extender por la zona de Quindío una modalidad específica de violencia protagonizada por los "aplanchadores" y por la policía. Ambos efectuaban "azotainas" contra los liberales sirviéndose del plan de machete. Ortiz establece que "en los municipios en los cuales la proporción del partido de gobierno era más considerable, hubo mayor participación de civiles conservadores como aplanchadores; mientras en aquellos donde su número era menor la tarea fue casi exclusiva de los agentes de policía" (Ortiz, 1985, 143). Al mismo tiempo, el autor señala que la expansión de esta modalidad de violencia está ligada a la creciente polarización política en el nivel nacional. Polarización que en la región del Quindío se expresó en la constante remoción del personal político liberal e incluso de los 8 alcaldes liberales, que, en junio de 1948, el gobernador había concedido como cuota liberal. Esos alcaldes habían sido removidos ya a mediados de

1949, a medida que la facción laureanista del conservatismo ganaba fuerza en el gobierno nacional. De ahí que el mismo autor señale que la elección de Gómez en noviembre de 1949 fue la consolidación del hostigamiento (Ortiz, 1985: 142). Interesa destacar la confluencia de Roldán y Ortiz en torno a la fecha de 1949 como un punto central en la periodización de la violencia, no tanto o no sólo por la elección presidencial sin la participación del liberalismo sino sobre todo por la radicalización política promovida por los sectores laureanistas.

Además, como se verá en la referencia al norte del Valle, las relaciones entre liberales y conservadores una vez rota la Unión Nacional de Ospina Pérez y convocados los liberales a la desobediencia civil, implicó que civiles conservadores actuaran en contra de los liberales con el apoyo de las autoridades seccionales. En el Quindío fueron los "aplanchadores", en el Valle las "Guardias Cívicas" antecesoras directas de los "pájaros". A diferencia de lo que tuvo lugar en el Valle y en otros departamentos del país, en el Quindío "no hubo combates colectivos de vereda a vereda ni tampoco se produjeron desplazamientos de multitudes para tomarse un municipio un corregimiento entero... En el Quindío, el común de la población conservadora se limitó a la participación en comisiones mixtas y a la protección de individuos violentos, personal más o menos especializado en su oficio. No se conocieron enfrentamientos directos entre fuerzas contrarias, distintos a los que se dieron entre las guerrillas y el Ejército" (Ortiz, 1985, 185).

Antes de la aparición de las cuadrillas, que fue en 1955, la violencia en el Quindío siguió siendo protagonizada por "aplanchadores". "Comisiones Mixtas" y por los "pájaros", quienes fueron acrecentando su participación en la violencia. El "pájaro" caracterizó parte de la violencia acaecida en el Quindío en los primeros años de la década del cincuenta. Se trata de un personaje vinculado a los caciques y políticos locales para quienes adelanta una serie de "trabajos" que favorecen la homogenización política de cuño conservador. Lo distintivo del "pájaro" es la connotación pecuniaria de su vinculación

con los caciques y demás políticos locales. Tal connotación pecuniaria era, a su vez, alimentada desde un sectarismo partidista cambiante, más claro en el caso de los "pájaros" del Valle que en el de aquellos que llegaron al Quindío. Un punto central en la referencia a los "pájaros" como modalidad de violencia en el Quindío es que ellos revelan las profundas interconexiones entre los distintos caciques. Interconexiones que les permiten intercambiar "pájaros" y cuadrilleros y que, además, los vertebran o articula en los partidos políticos.

Por otro lado, Carlos Miguel Ortiz señala que desde el 9 de abril y la posterior persecución a los liberales, el Quindío es escenario de iniciativas de resistencia política, todas ellas fragmentadas y fracasadas. Esos intentos dispersos de resistir la persecución de "pájaros" y "aplanchadores" fracasan, según el autor, por la inestabilidad y la inexperiencia con las armas de los combatientes y por la indecisión y las oscilaciones de los jefes liberales en apoyarlas. Al respecto Ortiz señala que muchos de los jefes liberales habían huido después del 9 de abril o se habían marginado de la escena política. La resistencia liberal no tenía director en lo local y —o esperaba las instrucciones de los jefes nacionales. Además, el autor señala que la población civil vaciló en respaldar a los cuadrilleros por sus múltiples fracasos, así como por sus acciones vandálicas. (Ortiz, 1985: 215). En efecto, Ortiz señala que las cuadrillas se hicieron fuertes solo después de 1953 y que como guerrillas se consolidan solo bajo el gobierno de Rojas Pinilla.

El mismo autor señala que no se puede establecer ninguna continuidad entre poblaciones gaitanistas y poblaciones donde las cuadrillas liberales se vieron fortalecidas. Las cuadrillas que se trasladan desde el vecino departamento del Tolima, no solo lo hacen con el respaldo sino a solicitud de propietarios cafeteros, caciques y hacendados que eran muy acosados por los "pájaros". (Ortiz, 1985; Sánchez, 1989b:163). Este proceso de fortalecimiento de las cuadrillas tiene lugar después de 1954, esto es, bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas cuando se ha designado como gobernador del de-

partamento a un coronel activo y en el que los alcaldes municipales suelen ser también militares.

Una de las pistas para entender porque sólo bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas logran los liberales darle forma a su resistencia, así sea bajo la figura de cuadrillas, es precisamente la amenaza que el proyecto centralizador de Rojas representa para las redes de poder local. Precisamente porque su presencia no era mediada por las redes sociales y políticas de las localidades. Más aún, porque el gobierno mantenía el estado de sitio, y no cesaba su persecución contra cualquier forma de oposición, incluyendo a los liberales. Henderson reseña que, bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas, los liberales seguían buscando formas de oposición, pues no olvidaban el comportamiento del presidente en la masacre de la Casa Liberal de Cali, así como sus vínculos con los "pájaros" del Valle que también fueron amnistiados al terminar 1953. El mismo autor comenta que ya en 1954, Rojas expresaba su malestar por los esfuerzos bipartidistas de acercamiento político sin su mediación o respaldo, así como por el interés liberal de acceder a un pacto con Ospina, su directo soporte político. Más tarde, los errores de Rojas frente a las manifestaciones de estudiantes y su interés por separarse de los partidos políticos precipitaron el acercamiento entre ellos e incluso la decisión de apoyar a los "muchachos de los montes" (Henderson, 1983: 324). En una dirección similar se orienta Gonzalo Sánchez quien recuerda que "los partidos tradicionales que habían permanecido en un cierto receso durante el primer año de Rojas, empezaron a valerse de los cotidianos hechos de sangre como instrumento de movilización política. Así, mientras por un lado condenaban el resurgimiento de la violencia, por el otro la estimulaban y declaraban a Rojas único responsable de ella" (Sánchez, 1989b: 163).

Debe destacarse que son los gamonales y caciques locales los que patrocinan y alientan el traslado y en cierto sentido la implantación de las cuadrillas del Tolima en el Quindío y que por esa vía quieren recoger las demandas de atención y sectarismo político de diversos grupos de pobladores y

también debe destacarse la discusión que sobre la figura del gamonal hace Ortiz. El autor problematiza las visiones de los gamonales que tienden a verlos como solamente manipuladores. También lo son, pero la violencia ya en 1954 ha transformado las redes en que los gamonales



asientan su dominación. Ortiz insiste en que el gamonal es ante todo un intermediario y por eso mismo vio afectado parte de su poder político con el desarrollo de la violencia en las zonas rurales. Cada vez más, se trata de gamonales ausentistas en contraposición con los bandoleros que tienen el control directo sobre la zona.

Al mismo tiempo, el poder del gamonal está limitado territorialmente por el poder de otros gamonales, mientras que los bandoleros extienden su proyecto por distintas veredas y poblados. Incluso el que las elecciones hayan estado suspendidas hasta 1958 deteriora la capacidad y la oportunidad del gamonal para enlazar los distintos grupos de pobladores y para asegurarse su lealtad. Hasta este punto no existe total claridad acerca de las condiciones que permitieron la emergencia y consolidación de las cuadrillas liberales, más allá de las amenazas que el proyecto de centralización política del gobierno de las Fuerzas Armadas representaba para políticos perseguidos bajo el sectarismo liberal conservador. En cualquier caso, Ortiz señala que "el fenómeno guerrillero fue excepcional y efímero en el Quindío" (Ortiz, 1985: 218).

El autor señala que el período 1954-1958 es una fase de pujanza y consolidación guerrillera en territorios que comparten condiciones específicas

tales como un proceso de colonización en marcha y la tolerancia con los jefes políticos nacionales y locales. Luego, entre 1959 y 1962 hay una fase intermedia en la que los bandoleros viven del apoyo de las comunidades. El Frente Nacional y sus propuestas de semiamnistía favorecen la desmovi-

lización de algunos cuadrilleros liberales, algunos de los cuales van a volverse informantes del Ejército. Las disputas políticas van a centrarse entonces entre los colaboradores y los no colaboradores del ejército en la localidad. De ahí que el cambio del papel del ejército después de 1962 precipite la crisis de identidad y la agonía de las cuadrillas (Ortiz, 1985: 251). Aún cuando el ejército termina comprometido en lo que Ortiz denomina "querrelas provincianas", su intervención aceleró la disolución de las cuadrillas de bandoleros.

En un señalamiento que recoge algunos de los desarrollos aquí expuestos, Carlos Miguel Ortiz resalta el carácter marcadamente económico de la violencia en las zonas cafeteras y su contraposición con las regiones rurales de menor comercio (no cafeteras) y los años primeros del enfrentamiento armado, que, según el autor, constituyen el lugar y el tiempo de la otra violencia: la política (Ortiz, 1985: 259). En este señalamiento está en juego la distinción acerca de la modalidad de violencia, tanto como su dimensión temporal. La violencia política tuvo lugar en las zonas rurales y en los primeros años de violencia, mientras que ya, en los 50 y 60, la violencia es marcadamente económica y cercana a los circuitos de la economía cafetera. Tanto así que las cuadrillas liberales transplantadas del Toli-

ma van a sufrir importantes transformaciones gracias a las influencias del nuevo medio. A diferencia de lo que tiene lugar en el Tolima, en el Quindío estas cuadrillas se comprometen cada vez más en delitos contra la propiedad urbana y rural, así como en retenciones de productos y extorsiones. En el bandolerismo del Quindío era ostensible el afán de lucro, más incluso que el sectarismo partidista (Sánchez y Meertens, 1983a: 106).

Eso señalan Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, quienes además recuerdan que el bandolerismo tuvo carácter masivo en las zonas donde la población campesina padeció los efectos del terrorismo gubernamental sin lograr articular sus propias fuerzas de resistencia. Municipios destacados por su alto rango en la producción cafetera se constituyeron en centros de cuadrillas. Los mismos autores recuerdan que, aún cuando el Quindío suele considerarse como zona de explotación parcelaria, es necesario reseñar la situación de la gran hacienda cafetera, cuyo nivel de desarrollo era intermedio pero aún así en algunos lugares lograba dominar la producción cafetera. Es el caso de Montenegro y Quimbaya. Por esta vía, los autores destacan que el desarrollo de la violencia es inseparable del tipo de estructuras agrarias y de las relaciones con las fuerzas productivas. Precisamente son esas relaciones las que sirven de sustento a las trayectorias de los bandoleros y las que en el caso de Quindío permiten que Chispas y Efraín González insinúen una transformación de bandoleros políticos a bandoleros sociales (Sánchez y Meertens, 1983a: 56).

Algo similar tiene lugar en el norte del Valle y el norte del Tolima. Ambas áreas cafeteras y de colonización antioqueña donde la violencia ni se agotó en las disputas burocráticas ni implicó la lucha directa por la tierra. Como en el caso de Quindío, se trata de unas regiones de integración subordinada a la política nacional y al mapa de hegemonías políticas regionales en las que una de las principales modalidades de violencia fue el bandolerismo.

En el estudio sobre la evolución de la violencia en el Valle del Cauca, Betancur y García insisten en la necesidad de diferenciar el tipo de socie-

dad regional que se configura en el plan del valle y el tipo de sociedad típicamente cafetera localizada en la región montañosa de las cordilleras central y occidental. Según los autores, en estas subregiones "son distintas las formas y períodos de ocupación, las configuraciones étnicas, las unidades productivas las relaciones de trabajo, y, en consecuencia, los conflictos agrarios y la violencia" (Betancur y García, 1990: 35). Los autores señalan, sin embargo, que los desarrollos diferenciables de estas sociedades regionales no deben ocultar el hecho de que el desarrollo capitalista de las zonas planas funciona como marco o como elemento contradictor de las transformaciones socioeconómicas de las regiones montañosas. Es en estas últimas, en las regiones cafeteras, donde nacen los "pájaros", a quienes los autores caracterizan como prototipo de la violencia en el occidente colombiano y que están profundamente vinculados a las facciones conservadoras.

La diferenciación regional introducida por Betancur y García parte también de las distinciones en torno al desarrollo capitalista. En el plan del valle, las antiguas haciendas van a ser convertidas en empresas capitalistas ya desde mediados y finales del siglo XIX. Por el contrario, las zonas cordilleranas van a ser pobladas por colonos antioqueños, tolimenses, caucanos y nariñenses durante las primeras décadas del siglo XX. Además establecen que esta colonización tardía esta muy marcada por el partidismo de las autoridades promotoras de esos procesos. Los autores insisten en que la colonización es manipulada electoralmente por los partidos tradicionales, en especial el liberal, y que tal manipulación favoreció cierto equilibrio en el reparto de tierras altas, pero de otro lado, contribuyó a la radicalización política y a que sectores conservadores del departamento se propusieran convertir la cordillera occidental en la cordillera azul. Aún antes de la violencia de los cincuenta, las zonas cordilleranas son escenarios de importantes conflictos agrarios en los años 30 y 40. Tales conflictos no desbordan nunca las estructuras partidistas, aún cuando los mismos municipios donde hubo conflictos agrarios son

municipios de conflicto electoral entre liberales y conservadores.

Además, es precisamente en estas regiones donde van a nacer los "pájaros" en la primera fase de la violencia, 1946-1949, y es también aquí desde donde la violencia va a empezar a extenderse hacia otras partes del departamento. Así por ejemplo, las ciudades del plan de valle, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, funcionan como centros político administrativos hacia los cuales se desplazan los amenazados por los "pájaros" en los municipios cafeteros. El desarrollo desigual de las dos subregiones se expresa en que las ciudades del plan funcionen como lugares de acopio y abastecimiento de los municipios cafeteros y que, en una segunda fase de la violencia, 1949 - 1953, los "pájaros" cordilleranos, sean articulados y profesionalizados desde Tuluá.

Al caracterizar en términos generales la violencia que tuvo lugar en el departamento, Betancur y García señalan que "no hubo allí lugar para conformar grupos armados con apoyo de los hacendados, como en el Tolima, Cundinamarca o los Llanos, sino pequeñas bandas en los pueblos y veredas cafeteras, que después fueron profesionalizadas desde Tuluá, por "El Cóndor", para cumplir el encargo de un sector del conservatismo: convertir la cordillera Occidental... en la cordillera azul" (Betancur y García, 1990: 55).

Al igual que en el caso estudiado por Roldán, el desarrollo de la violencia en el Valle exige diferenciar regiones, modalidades y fases de la violencia. En la primera fase de la violencia, 1946 -1949, las zonas más afectadas fueron los pueblos y caseríos cafeteros donde el predominio del gamonalismo y las relaciones clientelistas hicieron explosivo el cambio de hegemonía política. Después del triunfo conservador de 1946, los alcaldes se encontraron, con concejos municipales de mayoría liberal "que entorpecían el nombramiento de policías, y funcionarios públicos, siguiendo la orientación impartida por la directiva liberal de organizar la resistencia civil al gobierno conservador" (Betancur y



García, 1990: 106) Ante tales circunstancias, los directorios conservadores municipales crearon las guardías cívicas que contaron con el apoyo de otras autoridades seccionales y que al mismo tiempo reforzaron el papel de los conservadores extremistas que estaban ascendiendo a las instancias de control local.

Como en el caso estudiado por Roldán, algunos de los principales dinamizadores de la radicalización política en esta primera fase de la violencia, fueron unos políticos emergentes, a los que los autores se refieren como "oscuros políticos pueblerinos". También como en el caso de Antioquia, la población tiende a aludir a estos políticos en usando términos como "aparecidos" y "oportunistas".

En una fase posterior de la violencia, los "pájaros" matizaron su carácter pueblerino y veredal para articularse con políticos de las ciudades del plan. Se produce un desplazamiento geográfico que los lleva del norte del valle más hacia el centro, donde finalmente van a establecer sus principales redes de operación. El accionar de los "pájaros" se convierte cada vez más en un accionar urbano, al tiempo que fortalecen cada vez más sus nexos institucionales. Distintas autoridades seccionales hacen uso de los "pájaros" con fines electorales y partidistas. Los autores resaltan que, a diferencia del bandolero, el "pájaro" no estaba enraizado en la comunidad campesina, sino que funcionaba más como un empleado de ciertas redes de poder radicalizadas. Además, el pájaro era un actor foráneo, movilizado desde fuera y con pocas vinculaciones con las poblaciones locales. Sus principales vínculos eran con los directorios partidistas, las autoridades radicalizadas o los políticos en ascenso. Los autores insisten en que el origen veredal de los "pájaros" redundó en que se vieran animados por una "ideología ancestral y rústica con muchos elementos mágico-simbólicos y de religiosidad popular". Por esta vía los autores quieren explicar por qué los "pájaros" no tienen nexos con la población campesina, pero al mismo tiempo creen que participan de una "misión salvadora" contra la anarquía y el caos representa-



do en el partido liberal. En esta segunda fase de la violencia, que para el caso del Valle también arranca en 1949, la acción de los "pájaros" se va a profesionalizar bajo la dirección y coordinación de León María Lozano, alias "El Cóndor", radicado en Tuluá.

Según los autores, esta fase de la violencia se extiende desde 1949 hasta 1955 y se caracteriza por el asalto a poblaciones enteras, el cambio de la filiación política de pueblos y veredas mediante los "arrepentimientos". En esta fase se destaca el papel del gobernador Borrero Olano, miembro de la facción laureanista y promotor de la conservatización del Valle por la vía de las guardias cívicas y más específicamente de los "pájaros".

Una tercera fase de la violencia en el Valle arranca en el período 1955-1957. Se trata del período en el que se configuran distintas cuadrillas liberales que se ven reforzadas por cuadrillas del Quindío y del Tolima. Los autores explican la tardía configuración de cuadrillas liberales en el Valle por la confluencia de tres factores: el extendido dominio de los "pájaros", la destrucción de la estructura organizativa del liberalismo y la dependencia de sus dirigentes con respecto a las órdenes de la Dirección Nacional liberal, y la debilidad de otras organizaciones partidistas o formas de articulación colectiva (Betancur y García, 1990: 141). Los autores resaltan que las cuadrillas liberales se localizan en el norte del departamento donde la sociedad es más

rural en detrimento del centro del departamento en donde predominan varios núcleos urbanos y un mayor desarrollo del capital. Sánchez y Meertens recuerdan que, al igual que en el Quindío, en el norte del Valle, las cuadrillas se consolidan en zonas donde la población había sufrido distintas persecuciones y en municipios que se destacan por su alto rango en la producción cafetera, como Sevilla y Caicedonia (Sánchez y Meertens, 1983a: 54).

En el caso de Antioquia la diferenciación regional se ve fortalecida por la contraposición de distintas sociedades locales. La contraposición entre unos municipios centralmente integrados y unos municipios periféricos y entre una violencia burocrática y otra que tiende a salirse de los márgenes partidistas puede sostenerse atendiendo a la importante diferenciación espacial y social al interior de ese departamento. En el caso del Valle es necesario distinguir entre la zona del plan y la zona cordillerana. Betancur y García muestran que el pájaro nace en la zona cordillerana, pero solo puede consolidarse con el respaldo y la protección de los grupos de poder asentados en el centro del departamento. Por la misma vía, los autores establecen que la resistencia campesina en forma de cuadrilla liberal se expandió en los municipios cordilleranos del norte. Antes se reseñó la evolución temporal de estos fenómenos, ahora es preciso resaltar que, a diferencia de lo ocurrido en Antioquia donde pueden contraponerse regiones y modalidades de violencia, en el departamento del Valle del Cauca, el desarrollo de la violencia expresó las profundas imbricaciones entre las sociedades locales, más que una diferenciación tajante entre ellas. En efecto, la sociedad que se articula en torno al desarrollo de la agroindustria en el plan del valle es distinta de la sociedad cafetera cordillerana.

Sin embargo, la evolución de la violencia retoma estas distintas trayectorias y muestra que están conectadas hasta el punto de hacerlas indistinguibles. Las dos zonas, el plan y la zona cordillerana van a verse envueltas de maneras distintas y mutuamente conectadas a lo largo de la violencia. Las ciudades del centro del departamento y más especifi-

camente del plan del valle se van a convertir en el centro de operaciones y de institucionalización de los "pájaros", mientras que los poblados del norte del Valle serán, luego de 1955, el escenario de resistencia campesina y de configuración de cuadrillas liberales. Como en el caso del Quindío, las zonas más afectadas por la violencia fueron áreas cafeteras donde el establecimiento de cuadrillas como forma de resistencia campesina se produjo de manera tardía. Incluso en el caso de las ciudades del plan del valle vinculadas con la violencia, se trata de núcleos urbanos atados al desarrollo de la economía del café. Al igual que en el caso del Quindío, el vínculo entre café y violencia pasa por el reforzamiento del papel de los administradores de fincas, así como del rol de los intermediarios en la comercialización del producto. También en esta región, el Estado intentó recuperar el control de la región combinando el apoyo a ciertas redes de poder y el uso del ejército. En 1962 se crea la VIII Brigada y se incluye al norte del Valle en los distintos programas de "recuperación" adelantados por el ejército.

Algo similar tuvo lugar en el norte del departamento del Tolima, zona cafetera vinculada a la colonización paisa. Pero antes de revisar la modalidad de violencia que tuvo lugar en esta subregión, es preciso situar la regionalización del departamento. En su estudio sobre la evolución de la violencia en el Tolima, Henderson introduce una subregionalización del departamento, aún cuando él se va a ocupar sólo de municipios centrales en cada uno de ellos. Así por ejemplo, en el norte del Tolima, Henderson estudia al Líbano y Santa Isabel. En el oriente enfatiza la situación de Cunday y Villarrica. En el sur destaca la importancia histórica y política de Chaparral y de Rioblanco. Mientras que en el centro del Tolima resalta los acontecimientos que tuvieron lugar en Rovira. Esto, muy a grandes rasgos, pues precisamente el autor analiza los flujos poblacionales y/o políticos que conectan las poblaciones en períodos específicos.

En cualquier caso, para responder a la pregunta por las condiciones locales que sustentan o permiten el desarrollo de la Violencia, Henderson hace

referencia a que "municipios y veredas que contaban con líderes fuertes y responsables con frecuencia fueron capaces de moderar el impacto de la violencia. Una región fácilmente accesible que ofrecía poca protección topográfica a los violentos sufría rara vez una prolongada etapa de Violencia. Y de modo inverso, municipios aislados, montañosos, sin amigos influyentes y cargados con una historia local violenta y sectaria eran los primeros candidatos para una etapa de Violencia aguda y prolongada" (Henderson, 1984: 178).

Así, las formas de regulación social local pueden neutralizar el desarrollo de la violencia, al tiempo que la geografía y un mayor o menor grado de dependencia con respecto a zonas integradas o modernas, puede también constituirse en un factor condicionador de la misma. En suma, resulta muy importante señalar con Henderson que la modalidad de la violencia que tiene lugar en las regiones expresa un grado específico de articulación de esa región con la vida departamental y nacional. Al estudiar el caso del Tolima, Henderson descubre que "la historia, la ubicación, el color político y hasta cierto punto el carácter económico de cada región del Tolima se combinaban para determinar la intensidad y la duración de la Violencia" (Henderson, 1984: 308).

En esta sección se hace referencia al Tolima en general y en particular al norte. Gran parte de lo sucedido en el oriente y en el sur es trabajado en la sección que sigue puesto que se vincula más directamente a los conflictos agrarios clásicos.

Como en los casos de Quindío y norte del Valle, en el norte del Tolima y más precisamente en el Líbano, una de las modalidades características de la violencia fue el bandolerismo. Para tratar de entender la evolución de la violencia en el Líbano, Henderson y los otros autores se remontan a las condiciones de colonización y poblamiento. Recuerdan que el poblamiento del Líbano forma parte de la expansión territorial de la colonización antioqueña por el centro occidente del país a mediados del siglo pasado. Pero, a diferencia de los otros poblados, El Líbano desde un principio va a ser pensado

como un bastión del liberalismo en esa colonización que salió de la ciudad de Manizales en 1864. Ya desde 1870 se va a propagar en el municipio el cultivo metódico de café (Henderson, 1984: 64). En el departamento del Tolima, el partido liberal había tenido la preeminencia política desde finales del siglo XIX, aún bajo la hegemonía conservadora. En los años 30 tras el advenimiento de los liberales a la presidencia de la república se adelantaron algunos cambios políticos aún cuando los conservadores no fueron perseguidos sistemáticamente. Sin embargo, algunas veredas que eran consideradas "madriguera de conservadores" fueron separadas de sus municipios y anexadas a otros. Eso fue lo que tuvo lugar en la vereda La Yuca, del municipio de Santa Isabel. Este municipio, vecino del Líbano, había sido objeto de importantes procesos de colonización promovidos por el Obispo de Ibagué, Ismael Perdomo, quien compró la antigua hacienda La Yuca, la parceló y la vendió a "leales familias conservadores". En los años 30, cuando los liberales acceden al poder promueven la separación de la vereda La Yuca del municipio conservador de Santa Isabel y su anexión al municipio liberal del Líbano. Los liberales recuerdan que el capataz de la antigua hacienda La Yuca fue quien asesinó a finales del siglo XIX, al fundador del Líbano, Isidro Parra.

Distintos episodios de este tenor enfrentaron a unos y otros especialmente en época de elecciones. Henderson resalta que con el cambio de gobierno de nuevo al partido conservador, el clima político en la subregión estuvo especialmente tenso, aún cuando la política de Unión Nacional y la fortaleza de los pactos entre algunas élites lograron retardar el arribo de la violencia. Como en los casos de Antioquia, Quindío y Valle, la violencia llegó al Tolima a finales de 1949, lo que coincide claramente con la ruptura de la Unión Nacional y la creciente radicalización política entre laureanistas y otras facciones de partido. Henderson dice "una vez que el gobierno pasó a menos de los conservadores más extremistas, quedando los liberales del Tolima sin amigos en Bogotá y sin puestos en burocracia local y en la policía, el departamento quedó abierto a la

violencia" (Henderson, 1984: 177). En esa misma dirección se orienta Medina, al señalar que Chaparral pudo contrarrestar la violencia hasta 1949 gracias a los pactos de los liberales y a los amigos políticos en el nivel nacional. (Medina, 1991: 325). Tanto así que luego del 9 de abril, solamente Chaparral y Armero fueron los únicos municipios tolimenses con alcalde liberal.

El Líbano resistió a la violencia gracias a los pactos entre la élite local que habían asegurado, por ejemplo, la calma el 9 de abril y que lograban matizar las arengas políticas de los líderes nacionales. La posibilidad de resistir a la violencia se vio fortalecida por el nombramiento de personal del ejército para el control del orden público, ya desde 1949. El ejército logró, según Henderson, contrarrestar el radicalismo político de los distintos bandos. La situación cambia en 1951, cuando fue reemplazado el ejército por un cuerpo de policía de marcado sectarismo que prontamente se involucró en las peleas del pueblo, avivó los ánimos y terminó dinamizando los enfrentamientos. A mediados de 1951, la policía se había enfrentado con grupos de pobladores y el desarrollo de la violencia generaba incluso problemas económicos. Ante tal situación, los directorios liberal y conservador del municipio adelantan un pacto político ante el secretario del gobierno departamental, con lo cual esperan dar confianza a las relaciones bipartidistas (Fajardo, 1978: 134). El acuerdo no tuvo mayor éxito y el enfrentamiento de los grupos guerrilleros y la policía permaneció a la orden del día. Tanto así que en abril de 1952, se produce "La invasión del Líbano por fuerzas gubernamentales". Tal hecho fue calificado como el peor desastre sufrido por el municipio y como el mayor catalizador para el rompimiento de las estructuras tradicionales que por tanto tiempo le habían dado estabilidad a la sociedad agraria" (Henderson, 1984, 224).

Darío Fajardo ha señalado que precisamente esta ruptura precipitó el apoyo de los gamonales a los bandoleros con los cuales querían contrarrestar la influencia de las guerrillas comunistas y la movilización sindical campesina (Fajardo, 1978: 133). Par-



te de las cuadrillas que operaban en el Líbano venían de otras zonas del departamento donde un pasado de conflictos agrarios se expresaba en una mayor capacidad para la resistencia campesina. En Líbano, el foco de la actividad guerrillera era el oriente, área liberal y cafetera, donde los guerrilleros forasteros encontraron condiciones para sostener la lucha. La persecución de los liberales ya después de 1952 precipitó la formación de núcleos armados locales que también contaron con el apoyo y en ocasiones la asesoría de compañeros del sur del Tolima enviados por el partido comunista. Los conflictos entre liberales y comunistas, incluso en el norte del Tolima no se hicieron esperar y venían sucediendo antes del golpe de Rojas Pinilla. Fajardo cita distintos testimonios donde se establece el interés de los directorios políticos del Líbano y especialmente del directorio liberal, de debilitar la creciente influencia comunista en la zona (Fajardo, 1978: 138). Tales enfrentamientos entre liberales y comunistas se acentuaron después de 1955, cuando a la rivalidad entre jefes políticos locales se sumó la acción del ejército en la zona y la colaboración de unos bandoleros amnistiados contra quienes aún permanecían "enmontados". En estos términos analiza Fajardo y Henderson el importante papel de bandoleros como Desquite y Sangre Negra. Ambos hicieron parte de su carrera en el sur del Tolima, pero establecieron en el Líbano una de sus "zona de trabajo". El bandolerismo constituye la modalidad específica de violencia bajo el Frente Nacional, pero, como tal, se alimenta de los conflictos, que ya en 1954 eran fuertes en el centro del Tolima, entre las cuadrillas liberales y los "patriotas o contrachusmas" vinculados al partido conservador.

La violencia evoluciona de formas distintas en las diversas regiones del departamento. En este punto interesa destacar que, al igual que en Quindío y el norte del Valle, en las zonas cafeteras del Tolima predominan las motivaciones no políticas sino económicas. Henderson reseña que, antes de 1955, la violencia en estas zonas "fue esporádica y perpetrada por personas o pandillas no identificadas" (Henderson, 1984: 188). Esto, a diferencia de lo que tuvo

lugar en el sur y oriente del Tolima, zonas que Henderson caracteriza como "montañosas, insalubres, sin caminos, y escasamente pobladas" donde cuadrillas liberales se instalaron y fortalecieron incluso antes de 1955.

Bajo el Frente Nacional, la violencia en el Tolima enfrentó a guerrilleros liberales y conservadores, a comunistas y a grupos dedicados al bandidismo. Estos últimos recogían antiguos bandoleros cada vez más vinculados a acciones de delincuencia común. Contra ellos se orientaron las principales medidas del Frente Nacional, que orientó al ejército en una lucha contra los grupos bandoleros y en menor medida contra las guerrillas comunistas.

Este recorrido esquemático por las distintas fases y modalidades de la violencia en la zona norte del departamento del Tolima evidencia los flujos que conectan esta región con las demás áreas cafeteras. Como en el Quindío y norte del Valle, se trata de una violencia con alto contenido económico, sin que eso implique la disolución del sectarismo partidista. Interesa destacar que en el Tolima, tanto como en los otros casos estudiados, las cuadrillas liberales se fortalecen bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas y con la protección de políticos locales. Como se vio antes, la respuesta del Estado concedió preeminencia al papel del ejército e incluso vinculó la historia regional a la lucha contra el comunismo.

Como en los casos anteriores, el carácter masivo del bandolerismo ya durante el Frente Nacional recuerda las resistencias de los políticos locales a un nuevo proyecto de centralización política que presiona la transformación de los bandoleros ya en simple delincuencia o en sujetos políticos con un proyecto alternativo. La regionalización de la violencia en el Tolima y el predominio del carácter pecuniario en el norte del departamento, anuncia, como se dijo ya para el Quindío y para el norte del Valle, una modalidad de integración territorial y social subordinada en lo político y estratégica en lo económico. El municipio del Líbano participaba en la economía cafetera de manera importante antes de los 50. A diferencia de lo que tendrá lugar en Quindío y norte del Valle que siguen siendo impor-

tantes productores de café aún después de la Violencia, la capacidad del Líbano para seguir vinculado a la economía cafetera se vería radicalmente reducida tras "la invasión gubernamental de 1952". El tipo de articulación y de integración territorial y social representada por la economía cafetera está muy diferenciada regionalmente. No sólo entre las áreas de occidente y oriente, sino incluso entre las distintas fases de la colonización antioqueña. Del recorrido presentado en esta sección interesa destacar varios puntos que se constituyen en indicios del vínculo entre modalidad de violencia y tipos de integración territorial y social.

Primero, existe una gran dificultad a la hora de cruzar la diferenciación subregional y la diferenciación temporal de la violencia en las zonas cafeteras de occidente. Mary Roldán encuentra un desplazamiento en el eje regional y temporal de la violencia de los municipios centralmente integrados hacia las zonas periféricas. Pero encuentra que las dos historias comparten la referencia al año de 1949 como "el comienzo" de la violencia, aún cuando la fase 1946-1949 haya arrojado algunas víctimas. Algo similar ocurre en el caso del Quindío y el norte del Valle donde la radicalización política conservadora que se toma el gobierno y el rompimiento de la Unión Nacional permiten que civiles conservadores locales participen del control del orden público y que inicien la persecución a los liberales. Por el contrario, en el norte del Tolima, y más específicamente en Líbano, el temprano nombramiento de militares para la gobernación y las alcaldías de municipios liberales así como el pacto bipartidista retardan el arribo de la violencia hasta 1952. Es cierto que antes de este año tuvieron lugar distintos episodios de violencia, pero en todos los casos se trata de "casos aislados" o de disputas locales que adquieren con el tiempo connotaciones partidistas.

Segundo, solamente los municipios centralmente integrados de Antioquia y en menor medida los municipios cordilleranos del norte del Valle padecen la violencia en la fase 1946-1949. En el primer caso se trata, la mayor parte de las veces, del reemplazo de una red política por otra. En el se-

gundo caso, se trata de la conformación de guardias cívicas para hacer frente al boicoteo que los liberales del concejo hacen de las medidas del alcalde conservador en el cambio de gobierno. En ambos casos se trata de acciones violentas que permanecen dentro de los márgenes de lo partidista.

Tercero, el año de 1949 y la radicalización política representada en la ruptura final de la Unión Nacional, así como en el fortalecimiento de las posiciones de los laureanistas dentro del gobierno de Ospina Pérez marca un punto importante en el desarrollo de la violencia en las zonas estudiadas. La elección de Laureano Gómez como presidente de la república con la abstención de los liberales en noviembre de 1949 recoge y consolida la radicalización política que estaba en marcha desde el 9 de abril y que nunca pudo ser neutralizada por el pacto de Unión Nacional del 10 del abril de 1948 y por la propuesta de "gobierno cruzado" de Ospina. En el marco de esta radicalización política del orden nacional se produce el desplazamiento de los políticos establecidos en los municipios cafeteros de Antioquia, que se afianzan los "aplanchadores" de Caldas y que las "guardias cívicas" del norte del Valle tienden a dar forma a los grupos de "pájaros". Solamente en el norte del Tolima, 1949 no marca directamente una transformación de la violencia, pues allí el gobernador y los alcaldes militares lograron contener, también mediante la fuerza, la radicalización política local.

Cuarto, en las distintas investigaciones regionales sobre el desarrollo de la violencia en Antioquia, en Quindío, en el norte del Valle y en el Tolima se insiste en que la dinámica de Violencia estuvo atada al papel de los foráneos, de los oportunistas y de cuadrilleros y políticos "venidos a más". Los diferentes investigadores han encontrado unas sociedades locales bastante lejanas del carácter tradicional y estático que con frecuencia se endilga a las zonas rurales. Por el contrario, los autores muestran que, antes y bajo la Violencia, las distintas sociedades regionales son el escenario de importantes transformaciones sociales y de la emergencia de nuevos grupos. En este punto preciso interesa destacar el

que estas distintas subregiones cafeteras están articuladas por grupos de caciques políticos tanto como de cuadrilleros trashumantes. Los estudios al tiempo que insisten en el papel de los forasteros y oportunistas, recalcan que muchos de ellos están "conectados políticamente" con los caciques locales o con los directorios partidistas de los pueblos vecinos. De esta manera se hace visible la articulación de los gamonales y poderosos locales por la vía partidista. Ortiz resalta este proceso como la "vertebración partidista de los caciques locales". Vertebración o articulación que les permite desplazar bandoleros, ampliar su repertorio político y contar con personal armado, neutralizar las directrices de alguna autoridad seccional, entre otros cosas. Mientras en el caso de Antioquia se insiste en que los foráneos provienen de los pueblos vecinos, en Quindío, norte del Valle y norte del Tolima, es claro que las relaciones políticas son más interregionales y que incluso todas estas zonas cafeteras recibieron el "apoyo político" del sur del Tolima para organizar la resistencia. Ese es el siguiente punto.

Quinto, un punto importante en la diferenciación regional y temporal de la violencia en las zonas cafeteras de occidente es que las formas de resistencia campesina o más exactamente, las cuadrillas liberales sólo logran establecerse en el período 1954-1955, esto es, bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas. En la medida en que el estudio de Roldán termina en el año de 1953, no se tiene información sobre la manera como la resistencia campesina partidista evolucionó en ese departamento. Lo que sorprende es que tanto en Quindío, como en el norte del Valle y el norte del Tolima, los liberales sólo pudieron resistir las amenazas conservadoras y pasar a la ofensiva cuando el gobierno de Rojas Pinilla precipitó la atención de los liberales locales sobre el campo. Ninguno de los autores trabajados responde explícitamente la pregunta sobre por qué razones las cuadrillas liberales sólo pueden florecer y consolidarse en las zonas cafeteras de occidente bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas. Una respuesta inicial se daba más arriba, cuando se insistía en que el gobierno de Rojas comienza como instru-



mento ospinista y alzatista y luego intenta construir un movimiento político propio. En efecto, Rojas intenta un nuevo proyecto de centralización política que no olvida la persecución a los liberales, al tiempo que recalca el rol del comunismo y quiere separarse o reducir el rol de los jefes conservadores. En este contexto, dirigentes liberales retirados de la escena política o limitados en su accionar durante los primeros años de la violencia, van a convocar la resistencia liberal y a promover la organización de cuadrillas. Sin embargo, el interrogante acerca de la relación entre el gobierno de Rojas, su amnistía y la consolidación de cuadrillas en la zona cafetera permanece abierta.

Sexto, otro punto que merece destacarse en la revisión sobre las modalidades de violencia y de integración territorial de las zonas cafeteras de occidente, es la fortaleza del bandolerismo. La violencia en la zona cafetera occidental subordinada, esto es, excluyendo Antioquia, se caracteriza por su marcado carácter económico y pecuniario, sin que esto signifique el abandono del sectarismo político. Las trayectorias de los bandoleros, sus distintas filiaciones políticas y regionales revelan el carácter explosivo de la filiación partidista en sociedades que siguen siendo de frontera, aún cuando cada vez más estén articuladas a redes políticas nacionales. El bandolero que vio cómo se iba restringiendo su espacio político

desde el gobierno de las fuerzas armadas hasta el establecimiento del Frente Nacional, no fue sólo un recurso de los gamonales para restablecer el control político. Sánchez y Ortiz están de acuerdo en que los bandoleros pasaron "de simples instrumentos de control electoral a ser el centro de los reordenamientos políticos en las zonas rurales, en competencia y no en simple alianza con los gamonales, desafiando incluso el poder de éstos en algunas zonas, actuando con pretensión de sustituirlos en otras" (Sánchez, 1989b: 176). Precisamente, la transformación de los bandoleros que amenaza con separarlos del control gamonal haría que, cada vez más, quedaran al margen de la legitimidad política y que fueran abandonados por sus antiguos promotores.

En estas zonas cafeteras, la filiación partidista carece de la centralidad y de la capacidad de dar forma a la sociedad local que le es propia en los municipios integrados de Antioquia o en las zonas minifundistas de Boyacá y Santander. En los primeros con la importante ayuda de la Iglesia y demás instituciones de la colonización paisa. En las demás zonas cafeteras, la filiación partidista mantiene una disputa con otras formas de jerarquización de la sociedad regional. Pero, también a diferencia de lo que ocurre en las periferias de Antioquia o en otras áreas de frontera, los partidos políticos tienen importantes efectos en el ordenamiento de la sociedad regional, en la explotación de un recurso estratégico para el desarrollo económico del país, el café y en la vinculación con la política nacional. En ese sentido, el bandolerismo como modalidad específica de violencia que, independientemente de sus posteriores trayectorias nace atada a los políticos locales, revela la situación particular de una filiación política bipartidista en una frontera importante. El auge del bandolerismo en las zonas cafeteras expresa la debilidad de las distintas formas de regulación socio-política en una zona donde el cultivo del café hace importante en el desarrollo de la economía nacional. Esa debilidad de la regulación sociopolítica es precisamente a la que se alude aquí como característica de las sociedades de frontera.



CONFLICTO AGRARIO Y SOCIEDAD LOCAL

Uno de los asuntos más trabajados en la historiografía de la Violencia es el conflicto agrario. Incluso, la existencia y fortaleza de las luchas por la tierra le permite a Mary Roldán diferenciar la violencia de las zonas cafeteras centralmente integradas y la de las zonas de frontera. En ese sentido, el conflicto agrario se constituye en uno de los indicios del tipo de integración territorial y social de una zona específica con la política nacional. El conflicto agrario participa de varias maneras en las relaciones entre las esferas políticas local, regional y nacional. Contrario a lo que suele creerse, el conflicto agrario no es un problema de las sociedades locales, sino que revela la forma local que toman distintas problemáticas del orden nacional. Los conflictos agrarios expresan un tipo específico de relaciones entre el campo y la ciudad, entre el Estado central y las regiones, y entre las distintas fuerzas productivas.

Históricamente, este tipo de conflictos se ha mostrado profundamente dependiente de los cambios políticos en el ámbito nacional. Catherine Legrand recuerda que, en la medida en que las modalidades de conflicto agrario dependen de los modelos prevalecientes de utilización de la tierra, la política nacional, el discurso del Estado central y la mediación política tienen un lugar preeminente (Legrand, 1986). En efecto, una parte sustancial de los conflictos agrarios tiene lugar en aquellos territorios donde el modelo de utilización de la tierra no estaba del todo definido. La misma autora señala que, entre 1850-1950, el Estado colombiano se debate entre vender los baldíos al mejor postor y por esa vía ganar recursos para pagar la deuda pública, o titularlos a quienes decidan cultivar y trabajar en ellos. Cada una de estas vías supone caminos distintos para el desarrollo rural y formas diferenciadas de

sociedad agraria. Sin embargo, las dos salidas al problema están atadas al desarrollo de la economía agroexportadora y a la inserción periférica del Estado colombiano en el comercio mundial. Precisamente este es uno de los elementos que revela que los conflictos agrarios no son un problema meramente local, sino que compromete las articulaciones entre las distintas esferas de acción política y sus agentes. Adicionalmente, Palacios ha señalado que los conflictos agrarios de los 20 y 30, si bien están localizados geográficamente en zonas precisas, "contienen todos los ingredientes típicos de la complejidad de los regímenes agrarios en transición", además de revelar que "la influencia ideológica de sectores urbanos" fue predominante (Palacios, 1983: 343).

Ahora bien, de la abundante discusión en torno a los conflictos agrarios, interesa reseñar aquí tres puntos. Uno, las modalidades del conflicto agrario (individual o colectivo) en la medida en que en ellas se apoya una diferenciación regional de la violencia. Dos, el papel de esos conflictos en tanto antecedente o incluso causa de la violencia. Tres, el tipo de conflicto agrario en zonas cafeteras específicas. Es obvio que estos problemas solo se distinguen con fines expositivos y que no agotan la discusión sobre los conflictos agrarios. Por ejemplo, no se aborda la discusión sobre Violencia-conflicto agrario y expansión del capitalismo.



ORIENTE Y OCCIDENTE: MOVILIZACIÓN COLECTIVA O INDIVIDUAL

Daniel Pecaú, en su prólogo al libro *Estado y Subversión* de Carlos Miguel Ortiz, señala que en la Violencia del Quindío "no existe efectivamente, como telón de fondo, un pasado reciente de luchas agrarias comparables a las del Tolima o Cundinamarca. No hay tampoco un vínculo directo con la precedente movilización gaitanista" (Ortiz, 1985: 16).

El Quindío no fue una zona de movilización agraria y aunque fue escenario de algunas guerri-

llas, sus acciones permanecieron enmarcadas en la lucha por la cosecha cafetera y por esa vía nunca enfrentaron o rompieron los cánones de la dominación partidista. Simplemente, se orientaban hacia lo que Pecaú y Ortiz han denominado "las estrategias individuales". Dice Pecaú: "el bandolerismo que se instala en las regiones de café hace parte de la difusión de las estrategias individuales, allí también la individualización se integra, en primer lugar, con la desorganización, posteriormente se desarrolla como una modalidad de adaptación y movilización" (Pecaú, 1987: 558).

En una dirección similar, pero que recalca el peso de lo electoral, se orientan Darío Betancur y Marta García quienes comentan "para el caso del occidente colombiano, el conflicto agrario presentó particularidades que lo diferencian de otras regiones del país tales como la lucha individual por la tierra y la manipulación electoral por los partidos tradicionales, principalmente la liberal durante los años treinta y cuarenta que si de una parte favoreció cierto equilibrio en el reparto de las tierras altas, de otra contribuyó a la radicalización del debate ideológico partidista en la medida en que propició las condiciones para la generalización de la violencia conservadora a partir de 1947" (Betancur y García, 1990: 19). El conflicto por la tierra está pues ligado a la lucha entre los partidos tradicionales por la hegemonía.

El punto referido al "equilibrio en la repartición de tierras altas" es de gran importancia, pues como recuerda Darío Fajardo (1978) parte de la diferenciación entre el occidente y el oriente cafetero, esto es, entre Antioquia, Viejo Caldas y Valle de un lado y Cundinamarca y especialmente Tolima del otro, está dada por el peso de la hacienda como marco para la expansión del cultivo (Fajardo, 1978: 15; Machado, 1976). Al respecto, Machado señala que "los sistemas de arrendamiento y aparcería son los más típicos en la época señalada en las zonas cafeteras del oriente colombiano, concretamente en el Tolima, Cundinamarca y Santanderes; y el sistema de la explotación con base en unidades familiares propietarias de la tierra que cultiva, es lo más

característico de las zonas cafeteras de la región occidental (Antioquia, Caldas, Valle y Cauca) (Machado, 1976: 178). Interesa resaltar que estas distintas formas de explotación del café dan lugar a relaciones sociales diferenciadas, a conflictos y tensiones agrarias específicas que a su vez pueden o no servir de antecedente para la violencia.

La Violencia pasa de manera privilegiada por los conflictos agrarios de algunas zonas de Cundinamarca y el sur del Tolima, donde la formación de la hacienda o su descomposición habían tenido un lugar destacado en los años veintes y treinta. En esas zonas la movilización agraria fue colectiva y contó con la mediación de algunos partidos distintos a los tradicionales. Mientras que en el "occidente", en Valle y Quindío, por ejemplo, tales conflictos agrarios sin estar del todo ausentes tuvieron una modalidad distinta, más individual y más atada a la acción de los partidos políticos. Legrand señala que en estos departamentos, la Violencia "ocultaba en parte una renovación de las luchas agrarias cuya naturaleza no ha sido elucidada aún" (Legrand, 1986: 221).

Algunos de los autores que más han insistido en las diferentes modalidades de conflictos agrario son Darío Betancur y Marta García. Ellos descubren que en el conflicto agrario del Valle, a diferencia del presentado en regiones como el Tolima o Cundinamarca donde la lucha fue colectiva e influenciada por el Partido Comunista, la UNIR o el Partido Agrario Nacional, se generó un movimiento mucho más individual que posibilitó la influencia partidista y que hizo de la manipulación electoral del conflicto agrario una constante (Betancur y García, 1990: 19). Al respecto resulta importante preguntar cuáles son las condiciones que facilitan o que enmarcan cada modalidad de enfrentamiento agrario. Por qué en unas regiones va a ser colectiva y mediada por partidos "alternativos" y en otras se presenta más como un movimiento "más individual" y que por esa misma vía dan un mayor papel a los partidos políticos tradicionales. Algo al respecto puede decir la estructura de tenencia de la tierra, tanto como el tipo de vínculos con la economía agroexportadora.

Algunos de los procesos que han sido interrogados para esclarecer esta cuestión son el poblamiento y las formas de jerarquización social en los poblados, especialmente la estructura de la hacienda. Así por ejemplo, se plantea como hipótesis que el carácter individual y no colectivo que tiene la lucha por la tierra en la zona de cordillera del Valle y aún en el Quindío, está relacionada con el carácter de colonización tardía, de zona de frontera cultural, y con las formas de jerarquización y control social que permitieron una ocupación del espacio que sin ser democrática tendía a excluir también al gran terrateniente. Eso en clara contraposición con las zonas del sur del Tolima, donde el papel de las haciendas como marco estructurador de la vida local era definitivo. O incluso con el oriente del Tolima y parte de Sumapaz, que son consideradas, por Fajardo, las zonas "epicentro de un proceso relativamente tardío de expansión de algunos núcleos de haciendas sobre tierras baldías" (Fajardo, 1978: 19).

Se sabe entonces que, en cierta medida, el carácter colectivo o individual de los problemas agrarios está relacionado con el tipo de colonización y con las formas de jerarquización social que él sustenta. En otras palabras, el tipo de mediaciones, de empresarios territoriales y de organización social que acompaña o caracteriza la ocupación de los territorios. Aquellas regiones de enfrentamientos agrarios colectivos como el sur y el oriente del Tolima son zonas de colonización reciente y además objeto de transformación por la vía del reforzamiento del rol de la hacienda o de otras formas de explotación comercial. Al respecto Fajardo puntualiza: "en el oriente del Tolima, como en el sur, la caficultura surgió ligada a las grandes explotaciones; en el caso específico de Cunday se hizo presente una modalidad hasta ahora no registrada en las otras dos regiones bajo estudio (Sur del Tolima, Chaparral y Norte del Tolima, Líbano), y es la formación de una gran empresa poseedora de extensas haciendas" (Fajardo, 1978: 31).

La importancia de preguntarse por la modalidad del conflicto agrario radica en que a partir de él se puede empezar a desbrozar la regionalización de

la Violencia y de sus protagonistas. Autores como Mary Roldán y Gonzalo Sánchez destacan que la existencia de conflicto agrarios enmarca modalidades específicas de violencia y la posibilidad o no de que ellas queden circunscritas a lo partidista. Además, porque como han mostrado distintos autores y entre ellos Fernando Guillén, la jerarquía social y partidista se basaba en el funcionamiento de la hacienda. (Guillén, 1997).



CONFLICTO AGRARIO COMO INDICIO Y COMO CAUSA

En su trabajo sobre la Violencia en Colombia, Paul Oquist (1978) caracterizó los conflictos agrarios, en tanto cambios socioeconómicos, como elementos reveladores de la creciente madurez de los conflictos entre las clases en Colombia. El vínculo entre conflictos agrarios y conflictos de clase queda bien recogido en esta cita de Oquist: "comenzando desde mediados de los años diez, los conflictos agrarios llegaron a ser un importante factor en la vida política colombiana. Esto marca un agudo contraste con la segunda mitad del siglo XIX, cuando hubo muy pocos conflictos entre las diferentes clases en el campo..." (Oquist, 1978: 212) y cuando probablemente había más tierra disponible a donde migrar. Aunque no se pueden negar los señalamientos del propio Oquist en el sentido de que "los conflictos sobre la tierra en las áreas de colonización estuvieron estrechamente vinculados con las relaciones laborales en el campo (y que) las clases y los términos de las relaciones de producción rural se convirtieron en asuntos conflictivos en la década de 1920 especialmente con respecto al arriendo y los contratos de aparcería" (Oquist, 1978: 206), es importante destacar que tales conflictos agrarios no se desligaron de la manipulación electoral e ideológica por parte de los distintos gobiernos. La situación se tornó conflictiva porque ya en 1920 el país enfrentaba la escasez de la mano de obra en el campo

y el compromiso de sectores trabajadores con fuerzas políticas distintas al bipartidismo.

Retomando planteamientos de Betancur y García, es preciso decir que los conflictos agrarios no enfrentaron tanto o solo clases sociales, sino que fueron usados y manipulados políticamente por los partidos y los gobiernos de turno. Incluso, puede señalarse que tal manipulación política de los conflictos agrarios y de la ocupación territorial no tuvo lugar solamente hasta los años 20 y 30 del siglo XX. Darío Fajardo muestra cómo en plena violencia, en el año de 1950, los comandos conservadores de algunos municipios recomendaban a las entidades públicas encargadas de los asuntos agrarios, familias conservadoras para ocupar la colonia agrícola de Sumapaz, destacada precisamente por su tradición liberal (Fajardo, 1978: 76).

Ahora bien, la discusión en torno a los conflictos agrarios resulta pertinente por tres razones. Primero, porque muchos estudios consideran que tales conflictos son la causa o el acelerador de la violencia, o que la violencia es la continuación de las luchas agrarias de décadas anteriores. Segundo, porque esos conflictos ponen en juego la posibilidad de distinguir entre causas o componentes políticos y socioeconómicos de la Violencia, y, tercero, porque la fortaleza del conflicto agrario y de resistencia campesina es un indicio del tipo de articulación territorial y social de regiones específicas con el Estado-Nación.

Sobre los dos primeros puntos se ha pronunciado Pecaut de la siguiente manera: "numerosos trabajos han sugerido que la violencia puede explicarse por la persistencia de tensiones agrarias, que estuvieron siempre presentes desde la segunda mitad del siglo XIX. La geografía de la Violencia corresponde parcialmente a la de los conflictos agrarios. Allí encuentran sin embargo una razón suficiente para establecer una relación de causa a efecto" (Pecaut, 1987: 494). Comentando la fortaleza del conflicto agrario como conflicto social, el mismo Pecaut señala la imposibilidad de distinguir o definir la primacía de "lo social o lo político de la Violencia. Para él, "el problema es establecer los

límites de una explicación causal cuando se trata de un fenómeno de este tipo" (Pecaut, 1987: 495). Así pues se cuenta con dos problemas de diferente orden. El primero es esclarecer el carácter del vínculo entre conflictos agrarios y Violencia. El segundo, recordar que si la violencia oscurece la demarcación entre lo social y lo político, el conflicto agrario tampoco puede ser considerado solo un problema de uno u otro orden. Esto es, que el conflicto agrario no es sólo un problema social o estructural, en detrimento de los problemas que serían propiamente políticos.

La insistencia en que la Violencia es la continuación de las luchas agrarias de las décadas anteriores parte de la constatación de que la regionali-



zación de los fenómenos de violencia coincide con el mapa de los conflictos agrarios que tuvieron lugar entre 1875 y 1930: se trata especialmente de las zonas norte y sur del Tolima, oriente del Huila y del Quindío. "En muchas de esas zonas se puede comprobar que la Violencia se manifiesta allí donde la presión de colonos sin títulos de propiedad había sido más fuerte en los años 1928-1936" (Pecaut, 1987). Además, importantes escenarios de la Violencia son a su vez espacios donde la represión de la colonización antioqueña había alimentado las fricciones. Pecaut se refiere al fenómeno en las siguientes palabras: "la presión de la colonización antioqueña alimenta las fricciones, choca desde 1940 con la escasez de tierra disponibles, y continúa en el norte del Valle del Cauca, pero al precio de una fuerte violencia. La colonización exagera la sobrecarga demográfica en el Tolima, donde como los datos lo prueban, el acceso a la tierra es cada vez más difícil, sobre todo a la tierra cafetera"

En esa dirección se orienta Medófilo Medina, cuando recuerda que los conflictos agrarios estaban vivos cuando sobrevino la violencia a Chaparral, en el sur del Tolima, y que tal cosa se constituye como "uno de los factores objetivos que explican tanto la llamada "revancha terrateniente" como los rasgos peculiares que tomó la resistencia campesina desde 1949" (Medina, 1991: 322). El mismo autor destaca que "en Sumapaz y el oriente del Tolima el conflicto por la tierra que había empezado a expresarse desde 1918 había tendido a resolverse en el momento en que Chaparral comenzaba la lucha de los trabajadores por la propiedad de sus parcelas. Según sus planteamientos, cuando sobrevino la violencia la propiedad de la parcela de los antiguos colonos no estaba en cuestión, al menos jurídicamente, en Sumapaz y el oriente del Tolima. Por el contrario, en "Chaparral los terratenientes aún en oposición al gobierno central no habían aceptado la situación creada por las colonizaciones en materia de tenencia de la tierra. El hecho de que continuara la lucha por la consolidación jurídica de la propiedad de los colonos, le confirió a la resistencia campesina una radicaliza-



ción mayor y a su vez una cierta propensión al desarraigo" (Medina, 1991: 332).

Para trabajar el vínculo entre conflicto agrario y expansión de la violencia en lo que al sur del Tolima hace alusión, Medina resalta que los procesos de colonización estaban muy activos en Chaparral en 1930 y que fueron activados como "consecuencia de la experiencia acumulada por los peones en la lucha por el salario y por el mejoramiento de las condiciones de trabajo" (Medina, 1991: 314). Insiste en que "si bien el establecimiento de los colonos venía produciéndose desde el siglo XIX, fue en los años treinta cuando este proceso se intensificó porque las haciendas incrementaron su demanda de brazos." De ahí que la cuestión agraria y la cuestión obrera fueran los conflictos característicos de la región (Medina, 1991).

Aunque el objeto de su artículo es la resistencia campesina en el sur del Tolima, Medina presenta una importante y útil diferenciación de los actores de los conflictos agrarios en distintas subregiones de Cundinamarca y Tolima. El autor resalta la fortaleza del papel de la hacienda en la estructura socioeconómica de la caficultura de Chaparral, en detrimento de otras formas de propiedad y de cultivo. Además, las características de esta hacienda hacen que los arrendatarios no sean un importante "núcleo de contradicción" en los conflictos agrarios, a diferencia de lo que tiene lugar en la región del Tequendama. En este sentido, Medina señala que en Chaparral, "no se ven negociaciones conducidas por arrendatarios como las analizadas por Palacios para las haciendas de Viotá. Las condiciones de dependencia de los trabajadores no asalariados de Chaparral impidieron el fortalecimiento de economías parcelarias dentro de la hacienda". Desde la perspectiva de este autor, el factor dinámico de los conflictos en la caficultura de Chaparral lo constituyeron en buena medida los peones convertidos en colonos. Así, mientras "en Viotá dicha crisis (de la hacienda) se precipitó en función del divorcio entre "plantación" y "economía familiar parcelaria", en el seno de la hacienda en Chaparral, se realizará como resultado de la presión ejercida desde fuera por los

colonos" (Medina, 1991: 316). Luego, aquello que se designa como conflictos agrarios implica un conjunto de relaciones diferenciables entre capital, trabajo y tierra. El punto no es solo la propiedad de la tierra sino la forma misma como ella es explotada, las relaciones con los trabajadores, las jerarquías de la fuerza de trabajo y la forma como sobre ambos opera la política nacional, el discurso del Estado y los esfuerzos por promover el desarrollo económico agroexportador.

Por su parte, Darío Betancur y Marta García, encuentran que tanto el conflicto agrario como la violencia liberal tienden a localizarse en los municipios de las laderas montañosas, o en los centros de mercadeo y abastecimiento aledaños a éstas. Además insisten en que los pueblos y veredas con conflictos agrarios fueron los mismos donde hubo manipulación electoral, mayoría liberal y violencia atada a las elecciones (Betancur y García, 1990: 29). Dos importantes variables enfatizadas por los autores son el manejo electoral y los vínculos entre distintas violencias y hegemonías partidistas. Así Betancur y García afirman que "en el Valle del Cauca el conflicto agrario se mantuvo al orden del día hasta bien entrados los años 50, estableciéndose una línea de continuidad entre los conflictos de los años 20 y los años 30, la violencia liberal y la violencia de los 50. Se destacan entonces los conflictos en los que algunos colonos contaban con el respaldo de grupos políticos, alcaldes, concejales y otros funcionarios públicos" (Betancur y García, 1990: 51).

Algo similar había señalado Fajardo para el caso del Tolima. A partir de la correspondencia de baldíos, el autor muestra cómo en los municipios del oriente del departamento, Cunday, Villarrica, Icononzo, e incluso en el vecino Sumapaz, se adelantaron procesos de homogenización política a partir de la redefinición de las comunidades agrícolas. Incluso señala que la politización de las luchas agrarias implicó, en los años treinta, que la lucha contra el latifundio se confundiera también con la lucha de liberales vs conservadores, aún cuando los terratenientes liberales estaban enfrentados a campesinos, jornaleros y colonos (Fajardo, 1978: 77).

Ahora bien, la politización de los conflictos agrarios no operó solo en la dirección de rivalidades liberales y conservadoras. Henderson recuerda que por esos mismos años 30 y con el restablecimiento de la hegemonía política liberal, el oriente del Tolima enfrentó importantes disputas entre hacendados y colonos, especialmente en el municipio de Icononzo: "el principio de la depresión económica a comienzos de los años 30, complicó aún más el problema de la tierra en el oriente del Tolima. Regresaban antiguos colonos que se habían ido con la danza de los millones y que volvían poseídos de "antiguas formas de descontento". Sin embargo, la politización en este caso, no transcurre ni por las vías partidistas ni por las estrictamente "radicales". Según Henderson, a finales de 1933 y "aguijoneados por funcionarios del gobierno, tanto nacional como departamental, los hacendados tomaron la medida, sin precedentes, de negociar con los rebeldes" (Henderson, 1984: 105). Así tuvieron lugar los Pactos de Icononzo, en los que finalmente se optó por suspender los hostigamientos de uno y otro lado, de terratenientes y colonos.

Resulta importante el señalamiento de Henderson sobre el papel de los funcionarios del gobierno nacional y departamental en la celebración de los pactos, pues recuerda que los conflictos agrarios no se agotan en la sociedad local, sino que con frecuencia buscan e incluyen la mediación política de las autoridades de otros niveles (Henderson, 1984: 105). También Catherine Legrand ha estudiado el importante papel de los intermediarios políticos y de los tinterillos en la vinculación del conflicto agrario local con la política nacional (Legrand, 1986). Los conflictos agrarios no son tanto la expresión de un antagonismo estructural y objetivo entre sectores sociales constituidos, sino más bien, la forma que toma la politización de la sociedad rural en un contexto de creciente vinculación con la economía mundial. Al respecto cabe recordar la amplia diversidad de actores protagonistas de estos conflictos agrarios (colonos, terratenientes, aparceros, compañías extranjeras) y la forma como una amplia mayoría está interesada e involucrada en las redes de

comercio de la economía agroexportadora. De ahí que se trate de los conflictos agrarios como una modalidad específica de politización. No se dice que antes de 1920 o de los más importantes conflictos agrarios, las zonas rurales no estuvieran politizadas. Malcom Deas y algunos viajeros han llamado la atención sobre la temprana politización de diversos sectores sociales en la Nueva Granada. En lo que se insiste es en el carácter novedoso de tal politización en la medida en que los distintos actores sociales se articulan cada vez más en los circuitos comerciales que dinamiza la agricultura de exportación y que al mismo tiempo habían venido fortaleciendo el papel del Estado.⁴

Precisamente el papel del Estado y la posibilidad de recurrir a distintas agencias en los diferentes niveles territoriales es una de las condiciones que utiliza Pecaú para discutir la continuidad entre conflictos agrarios y violencia. El autor recuerda que entre 1920 y 1936 los conflictos agrarios intensos estuvieron acompañados por un rol central o por lo menos creciente del Estado. Las partes en conflicto no recurrían necesariamente a la violencia, sino que adelantaban acciones políticas, actuaban organizadamente. Por el contrario, en el período 1949-1953, las demandas y los conflictos no se orientaban hacia el reconocimiento de los derechos jurídicos sobre la tierra, y en ese sentido, no se dirigían hacia el Estado. Para Pecaú, "lo que estaba en litigio no era, como en la situación anterior, la redefinición de los derechos colectivos" (Pecaú, 1987: 553), en este período la relación con el Estado no aparece como decisiva. Los actores se enfrentan unos con otros pero no reconocen ni invocan el papel del Estado.

De ahí que este autor insista en que "la facilidad con que se propaga la violencia no es debida solamente a la persistencia de las tensiones agrarias. La violencia golpea, no puede negarse a muchas zonas donde los conflictos habían sido muy vivos veinte años antes. En el ínterin, sin embargo, el movimiento campesino se había desarticulado debido a las mutaciones políticas ocurridas durante la Revolución en Marcha. En la misma dirección se orientan otros autores, para quienes el proceso de



parcelación adelantado bajo la ley 200 de 1936 "desmoronó la solidaridad del movimiento campesino" en regiones como Sumapaz. Tales reformas redujeron la importancia política del "problema de los colonos" y el ímpetu de la movilización política de los sectores agrarios (Legrand, 1986: 199-200; González y Marulanda, 1990). En el caso concreto de Sumapaz, la ley 200 de 1936 tuvo importantes efectos. Elsy Marulanda (1991) ha mostrado que las medidas asociadas a tal ley produjeron en el contexto del Sumapaz una creciente diferenciación entre los sectores campesinos así como el relativo aumento de los enfrentamientos entre ellos y en detrimento del conflicto entre hacendados y colonos. Según la autora, las políticas puestas en marcha con la ley 200 redujeron el carácter político e ideológico

del "problema de la tierra", al tiempo que reforzaron los vínculos entre campesinos y partidos políticos tradicionales. Esto, a pesar de que las reformas legales promovieron la desintegración de la hacienda como unidad productiva y como espacio para la regulación política (Marulanda, 1991: 244).

La misma autora comenta que, como resultado de la aplicación de las medidas asociadas a la ley 200, "las anteriores organizaciones campesinas, influidas por grupos políticos de izquierda, desaparecieron y se dio paso a otras asociaciones adscritas a organizaciones institucionales de trabajadores, como los sindicatos agrarios filiales de la Federación de Trabajadores de Cundinamarca (FTC), a su vez filial de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)" Al mismo tiempo Marulanda señala que la ley 200 favoreció la desaparición de organizaciones políticas que durante los años veinte y treinta contribuyeron a la organización política del campesinado. Alude aquí a la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y al Partido Agrario Nacional (PAN). Desde la perspectiva de Marulanda, las distintas transformaciones de la organización campesina y de su discurso político, cada vez más lejano de la antigua contraposición entre hacendados y campesinos, enmarca la evolución de la violencia de los años cincuenta (Marulanda, 1991: 240).

En una dirección similar se orienta Pecauf para quien la crisis del movimiento campesino favoreció el desarrollo de la violencia. Esta última es, por otra parte, particularmente devastadora y durable en regiones como el Quindío y el norte del Valle o ciertos sectores del Tolima, que habían permanecido al margen de los grandes conflictos de 1930 y de la proliferación de las ligas agrarias. Tales regiones se caracterizan igualmente –incluso si su colonización se había visto acompañada de litigios de violencia– por una repartición de la propiedad muy diferente a la de los departamentos situados al oriente del Magdalena. Muchos de los protagonistas de la vio-

4 Esto con la notable y relativa excepción de los conflictos agrarios protagonizados por los indígenas del sur y suroccidente del país.

lencia en estos sitios no tuvieron además ninguna relación con la tierra" (Pecaut, 1987: 554).

En la sección que sigue se retoma la caracterización que hace Pecaut del movimiento campesino como un movimiento en crisis, por ahora es preciso recordar que, tal y como se estableció antes, Quindío, norte del Valle y la parte norte del Tolima aparecen como importantes regiones cafeteras donde la violencia tuvo expresiones claramente diferenciables, a partir de lo que se llamó antes, una "integración subordinada", "secundaria" a la política nacional.

A partir de esta discusión sobre la centralidad de los conflictos agrarios y sobre su relación con la violencia, pueden examinarse, con más detalle, las diferenciaciones regionales y temporales de la violencia en las zonas que antes se han denominado "cafeteras en decadencia": oriente y sur del Tolima y occidente de Cundinamarca.



LA RESISTENCIA CAMPESINA

En la parte inicial de este capítulo se presentó una tipología de distintas sociedades regionales en las que la evolución de la violencia y la respuesta del Estado fueron parcialmente diferenciables. Además, en las páginas anteriores se insistió en que la modalidad específica de violencia que tiene lugar en una región expresa formas distintas de integración territorial y social. En líneas generales se ha dicho que la modalidad de violencia que enfrenta unas redes de poder con otras, pero que no se sale de la filiación partidista, es la violencia característica de los municipios centralmente integrados ya sea por la acción de los partidos políticos, la iglesia católica o un proyecto regional.

Por el contrario, aquellas regiones caracterizadas por la acción tardía de cuadrillas y grupos de bandoleros, reflejan una articulación subordinada a la política nacional, aún cuando sean escenario para el cultivo de un recurso estratégico en

la economía nacional, el café. En estas zonas cafeteras, con la excepción de Antioquia, la modalidad específica y masiva de violencia fue el bandolerismo que, aún cuando nace vinculado a los jefes políticos locales, tiende a enfrentar la regulación partidista. En este asunto, los bandoleros se apoyan en el carácter de sociedad de frontera que aún predomina en las zonas cafeteras y en los grupos de guerrilla radicalizados políticamente en las zonas vecinas. En la referencia al departamento de Antioquia se aludió a la violencia de guerrillas que caracterizó a las zonas periféricas y en las que, aunque se invoca la retórica partidista, la violencia desborda a los partidos políticos.

El interés de esta sección es dar cuenta de la modalidad de violencia que tuvo lugar en ciertas zonas de los departamentos del Tolima y Cundinamarca. A diferencia de las zonas trabajadas antes, en estas últimas hubo importantes experiencias de resistencia colectiva a la violencia. Pecaut señala que la intensidad de tales formas de resistencia no debe exagerarse por cuanto los campesinos permanecieron situados en una relación de fidelidad con su partido, y por cuanto, gran parte de las acciones tuvieron un carácter netamente defensivo (Pecaut, 1987: 564). Aún así, es importante señalar que estas formas de resistencia tuvieron un lugar destacado en la evolución de la Violencia y que incluso se constituyen en el principal antecedente, que no causa, del conflicto armado actual. Como es sabido, parte de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, inicia su carrera política en las guerrillas liberales o comunistas del sur del Tolima.

Antes de seguir conviene delimitar aquello a lo que se alude como resistencia campesina. Medina señala que la resistencia campesina en el caso del sur del Tolima se asocia "a la promoción por parte de grupos de trabajadores rurales de reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra o a pretensiones de poder, así fueran vagamente expresadas en relación con el gobierno central y su representación local, a las cuales no se les reconocía legitimidad alguna por haberse convertido en agen-

tes del terrorismo y la represión con objetivos de afianzar la hegemonía de un partido político" (Medina, 1991:323).

Ahora bien, la modalidad de violencia que se expresa en las guerrillas revela un tipo específico de articulación territorial y social de las subregiones con la política nacional. En la sección anterior se trabajó la discusión en torno al vínculo conflicto agrario – violencia, en esta sección se enfatizan las modalidades de violencia en subregiones definidas y estrechamente interconectadas: oriente y sur del Tolima y occidente de Cundinamarca.



ORIENTE DEL TOLIMA Y SUMAPAZ

El desarrollo de la Violencia en el oriente del Tolima y la región de Sumapaz tiene un punto fundamental en el año de 1949, cuando la radicalización conservadora y la campaña electoral de Laureano Gómez fortalecen la persecución y el hostigamiento de las mayorías liberales en Villarrica y Cunday. Mientras que en la Colonia Agrícola de Sumapaz, los "pájaros", ponían en marcha un proceso de homogenización política conservadora (Fajardo, 1978: 122; González y Marulanda, 1990: 36).

Los mismos autores establecen que la persecución conservadora fue neutralizada rápidamente gracias a los antecedentes de la organización campesina de ligas y sindicatos. En ese sentido, se dice que "el movimiento agrarista se convirtió en movimiento guerrillero, con varios comandos y varios municipios como área de influencia" (González y Marulanda, 1990:36; Fajardo, 1978; Sánchez, 1989a).

En una dirección similar se orienta Gonzalo Sánchez, quien señala que la evolución de la violencia en Sumapaz muestra que el movimiento campesino, con el respaldo de las armas, contrarresta la ofensiva terrateniente de mediados de los cuarenta. Para este autor, el movimiento campesino se había armado y no había desaparecido (Sánchez, 1989a: 150). Esto, en contraposición parcial con la postura

de Pecaut, para quien la Violencia "preside sobre todo la desagregación" (Pecaut, 1987: 566) del movimiento agrario, su creciente fragmentación, más que un cambio de repertorio o de acción.

El punto es de gran interés porque supone aproximaciones distintas a la sociedad regional y a las formas de acción colectiva que en ella tienen lugar. Aunque no se cuenta con los medios conceptuales e históricos para zanjar la discusión, es importante tenerla presente por cuanto la caracterización inicial que se hizo de estas zonas, es que son zonas en decadencia y en creciente desarticulación política y económica con respecto a la nación. Desarticulación que se hace visible cuando se observa que a pesar de la movilización política y del aprovechamiento del movimiento agrario, las guerrillas no logran romper la dependencia política partidista.

Durante la campaña de Laureano y los primeros años de su gobierno se fortalecen los conflictos entre los delegados del gobierno nacional y los grupos locales. Tanto así que, a comienzos de 1953, en Villarrica se presentaron varios enfrentamientos entre los comandos liberales y la policía chulavita. A lo largo de estos años se van unificando los distintos comandos liberales y el movimiento agrarista. En este contexto de creciente articulación de los grupos guerrilleros se produce el golpe de Rojas Pinilla y su propuesta de amnistía.

La creciente articulación de los guerrilleros redundó en el hecho de que no todos aceptaron la desmovilización e incluso, los más cercanos al movimiento agrario siguieron preparando la resistencia. Es también por esos años, 1954, que algunos "sureños", guerrilleros que provienen del sur del departamento del Tolima y muy influenciados por el partido comunista colombiano, se desplazan hacia Villarrica. Allí ponen en marcha un programa de Frentes Democráticos de Liberación Nacional cuya gestión precipita los temores de Rojas y hace de Villarrica una zona amenazante para su proyecto político. Más aún porque los Frentes Democráticos criticaron públicamente la gestión de Rojas y sus "salidas autoritarias" en los problemas con los estudiantes y con algunas casas editoriales. El general

favorece la persecución de comunistas, para lo cual hace de la zona de Villarrica y de Sumapaz, en mayo-junio de 1955, un campo de operaciones militares donde tienen lugar bombardeos y persecuciones. Al respecto interesa destacar que el comunismo de Villarrica fue importado desde el sur del Tolima. Según los testimonios recogidos en un estudio (González y Marulanda, 1990: 132) quienes llevan la guerra a Villarrica son los guerrilleros del sur del Tolima, los "sureños" claramente distinguibles de los nativos de Villarrica, quienes se dejaron "engañar". De ahí que en los testimonios uno de los entrevistados insista en que "no habíamos salido de una guerra cuando nos metieron en otra". En el mismo trabajo se retoman distintas entrevistas que muestran las tensiones propias del tránsito de un movimiento agrario hacia el comunismo. Tal tránsito fue presionado por personal político vinculado al comunismo, por líderes armados del sur del Tolima y por los discursos y las políticas del gobierno de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos entrevistados señalan que para ellos la acción de resistencia en Villarrica no fue nunca comunista, sino campesina (González y Marulanda, 1990: 135). Se ha caracterizado con algún detenimiento esta situación por cuanto el caso de Villarrica y en términos más amplios el del Sumapaz, constituye un referente a la hora de pensar los vínculos entre conflicto agrario y desarrollo de la violencia. De la reseña presentada sorprenden dos cosas. Primero, los esfuerzos de un actor regional específico, esto es, de unas guerrillas delimitadas territorialmente por expandir su dominio y articularse con otros grupos poblacionales. Segundo, que una movilización agraria, un movimiento campesino, termine convertido por las relaciones entre política nacional y actores regionales, en un movimiento comunista. Por esta vía se hace evidente la profunda maleabilidad de la política nacional y de la política local.

Posteriormente, con el establecimiento del Frente Nacional, aquellos guerrilleros liberales o comunistas que hicieron oposición al pacto bipartidista serán perseguidos en calidad de bandoleros o maleantes. La evolución general de la violencia y el

espacio político en el oriente del Tolima y Sumapaz es recogida en el siguiente señalamiento de González y Marulanda: "las guerras de Sumapaz se enmarcaron dentro de sucesivas estrategias de control territorial y adscripción política: primero, a los postulados del régimen conservador, como una guerra contra los "usurpadores" so pretexto de proteger a los hacendados que aún permanecen en la zona y garantizar el regreso de quienes habían huido. Segundo, a los de la dictadura militar en nombre de una cruzada anticomunista bajo el lema de la defensa de la democracia y de los valores cristianos. Y, tercero, a los del Frente Nacional, que bajo las banderas de la "reconciliación nacional" y la paz entre los partidos tradicionales iniciaba un nuevo período de persecución a las zonas y sectores desafectos. Para estos mismo autores no es casualidad que las distintas operaciones militares durante las guerras del Sumapaz hayan transcurrido en el mismo escenario de la colonización espontánea y del área de colonización dirigida en la colonia agrícola (González y Marulanda, 1990: 43).

El recorrido por las formas y tiempos de la violencia en el oriente del Tolima y Sumapaz ha dado pie a la caracterización de la región como una zona en decadencia y en un proceso creciente de desarticulación política y económica con la nación. Tal caracterización parte de la constatación de que uno de los núcleos centrales del conflicto en la zona era la contraposición entre colonos y terratenientes. Contraposición que en los años cuarenta no recibía por parte del gobierno central la atención de años anteriores y que delineaba nuevos límites para la filiación partidista. Darío Fajardo hace alusión a estos problemas señalando el marco complejo y ambiguo en el que transcurre la interacción colonos-hacendados, colonos-autoridades locales y colonos-arrendatarios (Fajardo, 1978: 74).

El Estado central o en su defecto el gobierno nacional cada vez expresa el menos interés por los "asuntos de la tierra" en la región. Esto aún cuando ni colonos ni terratenientes han logrado un acuerdo en torno a lo que está en juego con la violencia o con la paz y cuando las acciones de los últimos

niegan el papel del Estado como regulador. En ese sentido la modalidad de violencia en estas zonas del país y la fortaleza de distintas guerrillas expresa un proceso de creciente desarticulación de la región y de ciertos sectores específicos, por ejemplo de colonos, con la política nacional. Se trata pues de una sociedad regional en decadencia. De nuevo, tal decadencia o creciente desarticulación se hace visible cuando el movimiento agrario puede recurrir a las armas pero no logra configurar un proyecto alternativo, y sigue siendo en amplio sentido, un movimiento adscrito al liberalismo. Así pues, es evidente una radicalización política de los campesinos, pero al mismo tiempo es claro que tal radicalización no rompe las filiaciones partidistas y por el contrario permanece a la espera de un guiño de las directivas nacionales.

A diferencia de lo ocurrido en las zonas cafeteras occidentales que tienen una gran participación en las exportaciones del grano, las zonas orientales del Tolima y los límites con Cundinamarca, son cada vez menos importantes en la economía del café, lo cual acentúa la desarticulación creciente a la que se aludía atrás.



SUR DEL TOLIMA

Al igual que en los casos anteriores, el referente temporal de la violencia en el sur del Tolima y especialmente en Chaparral es el año de 1949. Año caracterizado por la radicalización política creciente en el partido conservador a raíz del 9 de abril y de la "traición" del presidente Ospina, quien después de esos episodios convocó de nuevo a los liberales al gobierno de Unión Nacional. Chaparral en cierto sentido estuvo "protegido" de la violencia en las primeras fases, por su prestancia política en el ámbito nacional e incluso por la presencia de Darío Echandía en el gobierno de Unión Nacional. Sin embargo, el municipio había sido escenario de importantes manifestaciones políticas el 9 de abril,

cuando fueron liberados los presos liberales, saqueados los puestos de comercio y nombrado un gaitanista como jefe civil y militar del municipio. Incluso, el 10 de abril, patrullas de liberales custodiaban el municipio contra un posible ataque de los pobladores de Ataco en el Huila. Sin embargo, durante estos días no se presentaron muertes violentas en la zona (Medina, 1991: 326).

En Chaparral como en el Quindío y en el norte del Tolima, el año de 1949 fue un año de persecuciones y hostigamientos partidistas. De la misma manera que en el norte del Valle y Quindío, la policía atacó a los liberales con el apoyo de grupos conservadores en las llamadas "comisiones mixtas". Pero a diferencia de lo ocurrido en esas zonas, la resistencia pudo organizarse aprovechando "la experiencia acumulada en tres lustros de conflictos con los hacendados". De esta manera peones y colonos dieron forma a la resistencia campesina, fortalecidos además con la acción destacada del partido comunista en la zona, y con su convocatoria para la autodefensa de masas (Medina, 1991: 327; Fajardo, 1978: 74).

La resistencia campesina se apoyó en la organización de las ligas campesinas y los sindicatos agrarios. Medina encuentra que personas vinculadas a los conflictos entre colonos y hacendados a comienzos de la década del 40, aparecen ya en la Violencia orientando la acción de los grupos armados (Medina, 1991: 328).

Para entender los tránsitos entre el movimiento agrario y la organización de un actor armado, es preciso atender a la importante presencia que el partido comunista tenía en la zona y en la configuración de ligas campesinas. Durante la Violencia, que, como se dijo antes, se extiende en Chaparral desde 1949, el partido convocaba a la autodefensa de masas, proveía de una orientación política específica a los grupos de campesinos y podía también orientarlos militarmente con adiestramiento y con armas (Medina, 1991: 329).

El partido comunista tiene desde sus orígenes una importante presencia en la zona del sur del Tolima, donde se vinculó a los arrendatarios en-

vueltos en sus disputas laborales y con los grupos indígenas que trataban de recuperar tierras comunales (Legrand, 1986:171). Medófilo Medina señala que la influencia del partido comunista en la subregión "llegó con colonos que procedían de las vecindades de Natagaima, Coyaima y Ortega, con los indígenas que se desprendieron de las comunidades que defendían sus tierras en esas comarcas" (Medina, 1991: 318).

Es difícil establecer la evolución de la violencia en el sur del Tolima, por cuanto es una zona en la que confluyen distintas subregiones, cada una con sus propios comandos políticos. En el sur del Tolima se asiste a la evolución política y armada de cuadrillas de campesinos, "los sureños" provenientes de distintas zonas y que llegaron a ser en los años sesenta fundadores de las FARC. Los mismos "sureños" que llevaron la guerra a Sumapaz y que se negaron a participar de las diversas amnistías políticas.

Hay dos condiciones que imprimen un sello característico a la violencia del sur del Tolima. Se trata por un lado, de los enfrentamientos entre guerrillas liberales y comunistas y por otro, de una violencia en la que los hacendados tuvieron un

lugar destacado. En el caso de Chaparral, por ejemplo, confluyen varias problemáticas que sirven de marco a la violencia. Así por ejemplo, Chaparral es un municipio cafetero, de creciente producción; pero al mismo tiempo es escenario de procesos tardíos de colonización y de expansión de la frontera agrícola. En los años 43-44 Chaparral era el espacio de una importante lucha entre colonos y latifundistas que involucró tanto al gobernador del Tolima como a prestantes figuras de la política nacional, como es el caso de Darío Echandía. Los terratenientes de Chaparral manifestaron reiteradamente su desacuerdo y su desconfianza contra los "amigos políticos de los colonos", a quienes además tachaban de "servidores del comunismo".

En una sección anterior se identificaron los principales elementos de la evolución del conflicto agrario en Chaparral. En esta sección interesa revisar con cierto detenimiento la dinámica de resistencia campesina en la subregión. Para empezar es necesario decir que no se trata de una sola modalidad de resistencia, sino que además de la diversidad regional, la resistencia campesina en la zona se caracteriza por su diversa composición social. A diferencia de lo que tuvo lugar en el Valle, Quindío y

Norte del Tolima donde la resistencia se empezó a organizar en el período 52- 53 y más claramente en el año, 1955, en Chaparral, la gestación de la resistencia se produce ya a finales de 1948. Medófilo Medina distingue cinco fases en la evolución de la resistencia campesina.

Una primera fase que arranca a finales de 1948 se caracteriza, según el autor, por el desorden, la huida de los perseguidos políticos y de los amenazados por la policía local y las comisiones mixtas. Durante esta etapa se producen algunos esfuerzos de organización entre los distintos grupos que han huido a las zonas rurales y una primera respuesta armada. La segunda y tercera fase identifica-



das por el autor tienen lugar durante el año 50. Por un lado se constituye la "Columna de Marcha" como proyecto de movilización geográfica y defensa contra los ataques enemigos. Por el otro lado, los distintos grupos de resistencia tratan de articularse mejor. Se producen distintos esfuerzos de "unificación de las diferentes formas de dirección militar en un solo organismo de dirección general" (Medina, 1991: 324). Al tiempo que el desplazamiento geográfico de la Columna hacia zonas distintas a las de origen introduce transformaciones políticas importantes. Según Medina, la movilidad de la "Columna de Marcha" aceleró el tránsito desde autodefensa hacia la constitución de grupo armado autónomo.

También en esta etapa y como correlato de la creciente movilidad geográfica de los grupos organizados, tiene lugar el establecimiento de El Davis, signo del encuentro y los esfuerzos de operación conjunta entre grupos de orientación comunista provenientes de Chaparral y otros grupos liberales del municipio de Rioblanco. (Medina, 1991: 333) La cuarta etapa se caracteriza por el desarrollo de acciones conjuntas en el terreno militar, entre liberales y comunistas. Los encuentros entre liberales y comunistas se realizaban ya en 1950, período cuando los intercambios entre los grupos giraban en torno a lo militar, más que alrededor de lo político o ideológico. (Fajardo, 1978: 106) Medina reseña que los mandos liberales que operaban más al sur de Chaparral, en Rioblanco, admiraban la eficacia militar de los destacamentos comunistas (Medina, 1991:333). Más aún por cuanto las guerrillas liberales habían sufrido importantes descalabros militares y políticos.

Existen registros sobre operaciones conjuntas de liberales y comunistas desde comienzos de 1951. La alianza entre unos y otros permitió la expansión de su control hacia distintos municipios del sur del Tolima y del norte del Huila. A finales de 1951 comenzaría la hostilidad entre los guerrilleros de Rioblanco y los de Chaparral. Los primeros, eran apoyados por dirigentes liberales de Tolima, Huila y Valle, terratenientes enemigos del comunismo (Me-

dina, 1991: 337), mientras que los segundos recogían la experiencia organizativa de colonos y peones contra hacendados. El conflicto entre los dos grupos creció con las condenas que el propio liberalismo hizo de las opciones políticas de los comunistas. Al respecto, Medina cita el testimonio del comandante Olimpo, según el cual la separación entre "liberales limpios" y "comunes" se originó en una carta del directorio liberal del Tolima que recogía bien las desconfianzas entre liberales y comunistas (Medina, 1991: 337).

Medina señala que, además de los factores de política general, el anticomunismo del liberalismo, los acercamientos bipartidistas y la fortaleza de los hacendados liberales en la promoción de los grupos de Rioblanco, la división entre limpios y comunes está relacionada con condiciones internas locales. Según sus planteamientos, las contradicciones entre las guerrillas de Chaparral y Rioblanco tienen que ver con la diferencia en la base social de esos grupos. "En la primera, (Chaparral), es visible la participación de proletarios o semi-proletarios agrícolas vinculados a la economía cafetera. Más al sur, en Rioblanco, la hacienda es prácticamente inexistente. En Chaparral otro sector importante de la resistencia estuvo conformado por colonos que no se habían consolidado aún como propietarios de sus parcelas. En Rioblanco las familias ampliadas que aparecen acaudillando los grupos armados pertenecen a una franja de campesinos acomodados con títulos de propiedad no sometidos a litigio" (Medina, 1991: 338) Las relaciones con la población fueron otro factor para el enfrentamiento entre los grupos guerrilleros, pues los "comunes" tendían a no enfrascarse en problemas con los conservadores y a conceder preeminencia a lo militar en detrimento del sectarismo político. El conflicto se alimentó también del hecho de "la permanencia de la guerrilla originaria de Chaparral en un escenario ajeno a su influencia social y política" (Medina, 1991:338).

La creciente expansión política y armada de los comunistas no era del agrado de los hacendados liberales quienes incentivaron los conflictos entre

unas guerrillas y otras. Las guerrillas liberales estaban más ligadas a las haciendas y gamonales liberales que sus contrapartes comunistas. En este contexto tiene lugar en Viotá y en agosto de 1952, "la Conferencia de Boyacá" a la que asistieron representantes de los núcleos guerrilleros de las distintas zonas del país (Llanos orientales, Magdalena Medio, Sumapaz y Carare-Opón), con la notable excepción de los guerrilleros liberales del sur del Tolima. También asistieron algunos miembros de la dirección nacional liberal y dirigentes del partido comunista (Medina, 1991: 338; Sánchez, 1989).

Sánchez considera que la ausencia de estas guerrillas en la Conferencia de Boyacá se explica en parte por la creciente manipulación que los comerciantes y hacendados cafeteros ejercían sobre aquellos grupos. De ahí su poco interés en los esfuerzos de coordinación nacional y sus múltiples enfrentamientos con los comunistas (Fajardo, 1978:112; Sánchez, 1989^a: 39).

A finales de 1951 y durante 1952 se producen importantes enfrentamientos entre liberales y comunistas en el sur del Tolima. Además, el ejército intensificó las ofensivas militares sobre la región y produjo una tregua entre los actores. La última fase comienza con la propuesta de amnistía política en el gobierno de Rojas Pinilla. Tal gobierno contó, en ciertos momentos con el apoyo de los sectores liberales, lo que favoreció la unidad bipartidista contra el comunismo (Sánchez, 1989; Medina, 1991: 339). Las propuestas de amnistía del presidente favorecieron la dispersión de los grupos y dieron lugar a distintas trayectorias políticas: "la constitución de cuadrillas de bandoleros en diversas modalidades, la conformación de zonas de autodefensa campesina, la reincorporación individual a la vida social" (Medina, 1991: 325). Los guerrilleros de Rioblanco depusieron las armas en 1953

Gonzalo Sánchez recuerda que "la lucha guerrillera se generalizó cuando la dirigencia del partido liberal se mostró incapaz para frenar el avance del régimen terrorista a través de la resistencia civil... los alcances y dimensiones reales de este proceso solo comenzaron a conocerse públicamente,

en todas sus implicaciones, con posterioridad al golpe de Rojas Pinilla, en 1953, y cuando sus protagonistas ya no tenían el carácter de combatientes sino de amnistiados" (Sánchez, 1989a: 143)

Ahora bien, la importancia de las guerrillas y su cubrimiento geográfico no debe llevar a sobreestimar su carácter de resistencia colectiva. Al tiempo que las guerrillas liberales expanden su control político esperan y tratan de conseguir el respaldo de la Dirección Nacional Liberal. Antes de la conferencia de Boyacá, los jefes guerrilleros pusieron a los dirigentes liberales ante el dilema de "encabezar la revuelta general" o permitir que los grupos de guerrilla la hicieran por su cuenta. Sánchez señala que, ante este dilema, "la oligarquía liberal sintió los temores del 9 de abril". En agosto de 1952 y ante los reclamos de las guerrillas para que la dirigencia liberal asumiera la dirección del movimiento de resistencia, López Pumarejo respondió "si es ésta la última oportunidad que tienen los directores del liberalismo para cumplir su destino histórico, según lo contemplan o interpretan los jefes de la revuelta armada, estamos resueltos a perderla. Y más todavía, a que se produzca el rompimiento definitivo con el pueblo que ellos nos anuncian..." (Sánchez, 1989^a: 146).

En una dirección similar se orientó Eduardo Santos quien en 1952 afirmó en una carta pública "que las guerrillas constituyen a partir de ese momento un obstáculo al reestablecimiento de la paz." (Pecaut, 1987: 562) Así pues, el fortalecimiento de las guerrillas y modalidades de resistencia campesina es inseparable de la posición ambigua que el liberalismo mantuvo hasta finales de 1952. Por un lado, la dirigencia liberal usaba las guerrillas para presionar al gobierno conservador de turno, por el otro lado, expresaba su temor y desconfianza frente a una movilización autónoma por parte de tales grupos. En este contexto de creciente separación entre las guerrillas y la Dirección Nacional Liberal lanza el general Rojas su propuesta de amnistía política a la cual se acogen gran parte de las guerrillas liberales en 1953. Las propuestas de Rojas y la dispersión de los grupos de resistencia, dio lugar a la cons-

titución de cuadrillas de bandoleros de distintas modalidades, a la conformación de zonas de auto-defensa campesina y a la entrega y la reincorporación de guerrilleros liberales a la vida civil (Medina, 1991: 325).

Por esta vía se produce un acercamiento entre los liberales amnistiados y el ejército en contra de los comunistas y de los liberales que se negaban a deponer las armas. Al mismo tiempo, esto es bajo la amnistía del general Rojas, bandas de conservadores denominadas "patriotas" aparecen a lo largo del Tolima, para impedir el regreso de los exiliados y de los amnistiados bajo el gobierno de las fuerzas armadas. (Fajardo, 1978: 147) Estas mismas bandas, unidas a las "contrachusmas" atacan las veredas que sirven de sustento a las distintas formas de resistencia y por esa vía aceleran la recomposición de las guerrillas liberales tanto como de las comunistas. En esa dirección deben entenderse los reclamos del partido liberal en torno a los crímenes y las persecuciones que, en 1954, adelantaban las "guerrillas de paz" creadas por el gobierno Gómez - Urdaneta. Bajo el Frente Nacional, algunas de las distintas formas de resistencia fortalecieron sus nexos con el sector disidente del partido liberal, el MRL, Movimiento de Recuperación Liberal. Las guerrillas comunistas mantuvieron su orientación hacia la auto-defensa de masas y se vieron fortalecidas con la incorporación de exguerrilleros liberales y otros perseguidos políticos.

Para terminar esta sección es importante recordar la diferenciación que Gonzalo Sánchez hace de los núcleos de resistencia. Sánchez caracteriza la resistencia como uno de los procesos globales de la violencia y recuerda que ella tuvo un lugar destacado en tres tipos de áreas. En la caracterización que hace de ellas el autor resalta el "estado de la cuestión agraria" como soporte y/o antecedente de la expansión de la resistencia. Las tres áreas a las que se alude son:

1. Las de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima donde la incertidumbre sobre los títulos de propiedad era tal que aún estaba viva la

1. cuestión agraria. Regiones en las que una considerable base campesina politizada en las décadas anteriores por los partidos socialista revolucionario, el partido comunista y la UNIR de Gaitán.

2. Las de frontera abierta y colonización inicial, dinamizada luego por la propia violencia: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio (en el circuito San Vicente de Chucurí - Barrancabermeja - La Dorada - Puerto Wilches), el Alto Sinú, el Alto San Jorge (en los límites de Antioquia y Córdoba).

3. Más excepcionalmente, zonas en donde ya había una estructura agraria consolidada (caso del suroeste antioqueño) pero en donde de todas maneras se combinaban condiciones topográficas favorables, relativo aislamiento de los centros de poder; cierto grado de homogeneidad política y alguna tolerancia terrateniente liberal, en el período de conformación del comando guerrillero" (Sánchez, 1989^a: 143).

El mismo autor señala que las guerrillas no lograron consolidarse en las zonas del altiplano cundiboyacense y en las regiones de colonización antioqueña porque ellas no tenían capacidad para sostener económicamente amplios contingentes armados, durante períodos largos.

A lo largo de este artículo se ha presentado una diferenciación territorial de la evolución de la Violencia. Se ha tratado de caracterizar el tipo de sociedad regional que tiene lugar en cada una de las zonas identificadas y de mostrar que en cada una de ellas es posible discernir una modalidad específica de violencia. Todo esto, a partir de la idea de que la relación entre Estado y violencia no es necesariamente una relación de exterioridad, sino que más bien, la violencia puede operar como un dispositivo de la formación del Estado en aquellos casos en que la vida social no se encuentra plenamente enjaulada en un territorio delimitado y en donde es posible evadir los esfuerzos de dominación política. (Elias, 1986; Tilly, 1992, Bolívar, 1999).

Este análisis se complementa con la identificación de situaciones tipo en que la violencia puede articularse al proceso de centralización política característico de la formación del Estado. (Bolívar,

2001) La evolución geográfica y temporal de la violencia que se ha presentado en este artículo debe cruzarse con el estudio de las luchas partidistas y de la composición de los actores enfrentados. La comprensión de la Violencia exige una discusión sobre el carácter de la filiación partidista y las tensiones propias de la redefinición de las bases sociales de la política. Tales problemas fueron desarrollados en la monografía que sirvió de base en la elaboración de este artículo, pero no alcanzaron a ser introducidas aquí. Por ahora basta con recordar que la formación del Estado implica la integración territorial pero también la articulación de nuevos grupos sociales y por esa vía la redefinición de la vida política. Queda pendiente el estudio detallado de la constitución de los poderes locales en cada una de estas sociedades regionales y sus nexos con la política nacional.



CONSIDERACIÓN FINAL

El estudio sistemático de las monografías regionales sobre la evolución de la violencia delatan el carácter fragmentario de la investigación sobre la misma. Existe una gran desigualdad en los análisis según las regiones y el período específico. Como se dijo antes, no existen estudios sistemáticos sobre el desarrollo de la Violencia en los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y en la región de los Llanos. Existe una abundante literatura testimonial que, sin embargo, falta trabajar y que desborda los intereses de este artículo. El texto insiste en la diferenciación de la Violencia en las zonas cafeteras de occidente y de oriente. Pero aún sobre estas zonas los análisis existentes no cubren los distintos períodos o se preguntan por fenómenos sencillamente distintos.

Otro punto en el que es preciso seguir trabajando, según lo que se ha desprendido del estudio de los trabajos regionales, se refiere a la periodización del fenómeno. Como se dijo anteriormente, las diferentes evoluciones regionales de la Violencia

hacen muy difícil establecer una periodización compartida por todos los casos. Sin embargo, a pesar de tales diferencias se destaca en los mismos casos la alusión a eventos similares como puntos nodales de la Violencia. En el caso de Antioquia, Quindío, norte del Valle y norte del Tolima se destaca la referencia a 1949 como año definitivo en la evolución de la Violencia. La campaña presidencial de Laureano Gómez es recordada como dinamizadora de la Violencia en esas distintas regiones. Ahora bien, en las mismas historias locales que destacan el segundo semestre de 1949 como fecha de iniciación de la Violencia se hace alusión a los temores del partido conservador contra el partido liberal a propósito de lo sucedido el 9 de abril.

Los datos de violencia regional no permiten establecer una relación directa, por lo menos en las zonas cafeteras de occidente, entre áreas de movilización gaitanista y desarrollo de la violencia. Las investigaciones dejan claro que los vínculos entre el 9 de abril y la evolución de la violencia no son directos, ni lineales. Por el contrario, tales vínculos pasan necesariamente por la elaboración conservadora de un discurso político según el cual, los movimientos de protesta tras el asesinato de Gaitán, los levantamientos provincianos contra las autoridades constituidas y los recurrentes triunfos liberales en las distintas contiendas electorales entre 1947-1949 formaban parte de un complot contra la hispanidad y el cristianismo en Colombia. En el capítulo tres se recogieron las declaraciones de algunos políticos conservadores cercanos a Laureano Gómez en torno al ambiente político de finales en el período 1947-1949. Es importante resaltar que según tales declaraciones, el desarrollo de la Violencia y del sectarismo político se apoya en los temores suscitados por las revueltas populares del 9 de abril de 1948. Los temores políticos suscitados por este evento y su capacidad de "evidenciar" un complot del liberalismo debe atarse también a los triunfos electorales del liberalismo por esos años y a la realización exitosa de varias movilizaciones sociales contra el gobierno de turno. Los vínculos entre el desarrollo de la violencia y los episodios del 9 de abril,

pasan necesariamente por la elaboración política de un complot liberal contra la nación colombiana. Tal elaboración del complot se alimentó de distintos fenómenos y sólo pudo afianzarse a mediados de 1949, cuando "los ejecutores del 9 de abril" pretendieron derrocar al presidente Ospina. Ese período, 1948-1949, y la consolidación de una lectura complotista de la evolución política de esos años son determinantes de la ofensiva conservadora y "chulavita" que registran las investigaciones regionales ya a finales de 1949 y comienzos del 50.

Otro punto importante para la discusión en la periodización de la Violencia se refiere a las modalidades de resistencia campesina. Importa reseñar que ya en 1950 hay formas de organización y auto-defensa en el sur del Tolima, pero que la resistencia liberal sólo logra ordenarse en 1955 en los munic-

pios de Quindío y Norte del Valle. Esta diferencia expresa tipos distintos de integración territorial y social, pero al mismo tiempo revela las dificultades de establecer una periodización compartida.

Para terminar es preciso insistir en que la tipología regional presentada en este artículo y que se apoya fundamentalmente en los trabajos de Mary Roldán sobre Antioquia, debe ser completada y reformulada a la luz de la experiencia de Boyacá, Santander, Norte de Santander y los Llanos orientales. No se pretende que sea una tipología final, sino más bien un insumo en la articulación de las investigaciones regionales sobre la violencia.



BIBLIOGRAFÍA

- Alape, Arturo (1985) *La paz, La violencia: Testigos de excepción*, Planeta, Bogotá.
- Bejarano, Jesús Antonio (1997) "Guía de Perplejos: una mirada a la historiografía colombiana" en *Anuario colombiano de Historia Social y de la Cultura no. 24*, Bogotá.
- Bejarano, Jesús Antonio (1987) "La historiografía de la Violencia", en *Ensayos de Historia Agraria Colombiana*, Cerec, Bogotá.
- Bejarano, Jesús Antonio (1987b) "Campesinado, luchas agrarias e historia social: notas para un balance historiográfico" en *Ensayos de Historia Agraria Colombiana*, Cerec, Bogotá.
- Betancur, Darío y García Marta (1990) *Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano*, Tercer Mundo-Iepri, Bogotá.
- Bolívar, Ingrid (1999) "Sociedad y Estado: la configuración del monopolio de la violencia" en *Revista Controversia* No 175, CINEP, Bogotá.
- Braun, Herbert (1998) *Mataron a Gaitán. Vida pública y Violencia urbana en Colombia*, Ed Norma, Bogotá.
- Christie, Keith, (1986) *Oligarcas, campesinos y política en Colombia. Aspectos de la Historia sociopolítica de la frontera antioqueña*, Universidad Nacional, Bogotá.
- Deas Malcom (1995) "Canjes Violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia" en *Dos ensayos especulativos sobre la Violencia*, Fonade, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- Deas, Malcom (1993) "La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de vida de la república" en *Del poder y la gramática*, Tercer Mundo, Bogotá.
- Fajardo, Darío (1978) *Violencia y Desarrollo*, Fondo Editorial suramericana, Colección Historia, Bogotá.
- González José Jairo y Marulanda Elsy, (1990) *Historias de Frontera. Colonización y Guerras en el Sumapaz*, CINEP, Bogotá.
- González, Fernán (1977) *Constituyente I Consolidación del Estado nacional, Controversia no 59-60*, CINEP, Bogotá.
- González, Fernán (1997) "Aproximación a la configuración política de Colombia" en *Para leer la política*, CINEP, Bogotá.
- Guillén, Fernando. (1997) *El Poder Político en Colombia*, Editorial Planeta, Bogotá.
- Henderson, James, (1984) *Cuando Colombia se Desangró*. Un estudio evocativo de la violencia en metrópoli y provincia. El Ancora editores, Bogotá.
- Legrand, Catherine (1997) "La política y la violencia en Colombia (1946-1965) Interpretaciones en la década de los ochenta, en *Revista Memoria y Sociedad* Vol 2 # 4.
- Legrand, Catherine, (1986) *Colonización y Protesta Campesina (1850-1950)* Centro Editorial Universidad Nacional, 1986.
- Machado, Absalón, (1976) *El Café. De la aparcería al capitalismo*, Editorial punta de lanza, Bogotá, 1976.
- Marulanda, Elsy. (1991) *Colonización y Conflicto en Sumapaz*, Tercer mundo-IEPRI
- Medina, Medófilo, (1994) "Historiografía política en el siglo XX" en *Historiografía al final del milenio*, Universidad Nacional.
- Medina, Medófilo, (1991) "La resistencia campesina en el sur del Tolima" en *Pasado y Presente de la Violencia en Colombia*, compilado por Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Cerec, 1991, p. 316, 322
- Oquist, Paul, (1978) *Violencia, conflicto y política en Colombia*, IEC, Banco Popular, Bogotá.
- Ortiz, Carlos Miguel (1994) "Historiografía de la Violencia" en *Historiografía al final del milenio*, Universidad Nacional, Bogotá.
- Ortiz, Carlos Miguel (1985) *Estado y Subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50*, Cerec, Cider, Uniandes, Bogotá.
- Palacios, Marco, (1996) *Entre la legitimidad y la violencia*, Editorial Norma, Bogotá.
- Palacios, Marco, (1983) *El café en Colombia, 1850-1970 Una historia social, económica y Política*. El Colegio de México y el Ancora editores, Bogotá.
- Palacios, Marco (1980) "La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia" En *Revista Mexicana de sociología* Vol. XLII, No. 3, México.
- París, Gonzalo. (1946) *Geografía Económica de Colombia, Tomo VII, Tolima*. Contraloría General de la República, Bogotá.
- Pecaut, Daniel (1998) "La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia" en *Análisis Político* no. 34, Bogotá.
- Pecaut, Daniel (1987) *Orden y Violencia*, tomo II, Cerec y Siglo XXI Editores, Bogotá.
- Pecaut, Daniel, (1987b) "Acerca de la Violencia de los años cincuenta" *Boletín Socioeconómico*, no. 17, Universidad del valle, CIDSE, Cali, 1987, p. 39
- Reyes Catalina (1989) "El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950" en *Nueva Historia de Colombia*, tomo II, 1946-1986, editorial Planeta, Bogotá.
- Roldán, Mary (1992) "Genesis and Evolution of La Violencia in Antioquia" Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Harvard (sin publicar)

- Roldán, Mary, (1989) "Guerrillas, contrachusma y caudillos durante la violencia en Antioquia: 1949-1953" en *Revista de Estudios Sociales*, FAES, no. 4, marzo de 1989, Pág. 73 y ss
- Roldán, Mary, (1988) "La política antioqueña" en Melo, Jorge O, editor de *La historia de Antioquia*, editorial presencia, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo (1989*) "Violencia, guerrillas y estructuras agrarias" en *Nueva Historia de Colombia, NHC*, Vol II, Editorial Planeta, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo (1989b) "La Violencia: de Rojas al Frente Nacional" en *Nueva Historia de Colombia, NHC*, tomo II, Editorial Planeta, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo (1983) *Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia*. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo y Meertens Donny (1982) *Bandoleros, gamonales y campesinos*, El Ancora editores, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo, (1985) "La violencia y sus efectos en el sistema político colombiano" en *Once Ensayos sobre la Violencia*, Cerec-Centro Gaitán, Bogotá, 1985
- Tirado, Alvaro (1989) "El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar" en *Nueva Historia de Colombia*, Tomo II, Editorial Planeta, Bogotá.
- Wilde, Alexander (1982) *Conversaciones de caballeros: la quiebra de la democracia en Colombia*, Tercer Mundo, Bogotá.
-

